



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO**



**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CIENCIAS PENALES**

**LA EVALUACIÓN DE LAS “LESIONES” EN EL DESARROLLO DE UN
PROCESO PENAL POR FALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL
DISEÑO DE UNA POLÍTICA JURISDICCIONAL EFICIENTE**

TESIS

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

**AUTORA:
YANE RAMOS SILVA**

**ASESOR:
MAG. FRANCISCO DELGADO PAREDES**

Enero, 2019

Ante el Ilustre Jurado, se presenta la Tesis “La evaluación de las lesiones en el desarrollo de un proceso penal por faltas y su incidencia en el ámbito del diseño de una política jurisdiccional eficiente”

Elaborada por:

Bach. Yane Ramos Silva

Mag. Francisco Delgado Paredes
Asesor de Tesis

Tesis aprobada por:

Dr. Rafael Hernández Canelo
Miembro de Jurado-Presidente

Dr. Amador Nicolás Mondoñedo Valle
Miembro de Jurado-Secretario

Dr. Alejandro Lamadrid Ubillus
Miembro de Jurado-Vocal

DEDICATORIA

A Dios, nuestro creador, por la oportunidad que nos da día a día de vivir experiencias a lado de nuestros seres queridos y permitirnos llegar a culminar la presente investigación.

Asimismo, a mi Esposo Liler, mis hijos: Gianella, Camilo y Benjamín; a mi madre por su apoyo constante en mi vida y en el desarrollo de esta investigación. A ellos; siempre el motor de mi existencia.

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios, único dueño de todo saber y verdad, por bendecirme durante este trabajo y por permitirme finalizar con éxito; pero no menos importante, a mi muy amado padre, quien desde el cielo guía mis pasos y me da la fortaleza de seguir siempre adelante y poder hacer posible terminar con mis objetivos profesionales.

ÍNDICE

Dedicatoria.....	3
Agradecimiento.....	4
Resumen.....	8
Abstract.....	9
Introducción.....	10
Primera Parte	13
Análisis del objeto de estudio	13
1. Ubicación.....	13
2. Planteamiento del problema.....	16
3. Pregunta problematizadora.....	19
4. Objetivos.....	20
5. Justificación de la tesis.....	21
6. Importancia del estudio	22
Segunda Parte	23
Desarrollo de la investigación y del marco teórico de la tesis.....	23
1. Antecedentes en la ejecución de la investigación.....	23
2. Marco teórico utilizado en la investigación	24
Capítulo I.....	25
El servicio de administración de justicia en el ámbito procesal penal.....	25
1. El análisis de la calidad del servicio público en el ámbito judicial.....	26
2. Los sobre costos económicos no asumidos en el trámite judicial.....	37
3. La atención de los derechos fundamentales en la persona humana que participa en un proceso penal en el Poder Judicial	42
Capítulo II.....	45
El análisis del contexto criminológico en el ámbito de la evaluación de políticas jurisdiccionales en el ámbito penal.....	45

1. El requerimiento social en el ámbito punitivo.....	47
2. Evaluación de los elementos de la política criminal.....	55
3. Política criminal en la determinación de un procedimiento especial en el ámbito jurisdiccional penal.....	59
Capítulo III.....	62
El proceso penal y los delitos imprudentes.....	62
1. El proceso penal en la actualidad.....	63
2. La oralización del proceso penal: una fórmula de evaluación económica.....	66
3. El tipo penal del delito de lesiones	69
4. Los delitos imprudentes.....	72
Capítulo IV.....	74
La evaluación de la política punitiva en el ámbito jurisdiccional con respecto del tratamiento de las lesiones	74
1. La evaluación económica del “daño” y de la “temporalidad” del trámite judicial.....	76
2. El análisis económico aplicable al proceso penal en el ámbito de las lesiones	78
Capítulo V.....	80
Hipótesis de trabajo en la tesis: Planteamiento de la reforma del procedimiento en función a la evaluación económica de las pruebas en procesos donde se analicen faltas por lesiones	80
Tercera Parte	85
1. Análisis estadístico del universo y muestra de estudio.....	85
2. Evaluación económica en los expedientes con la evaluación de “lesiones”.....	97
3. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados....	106
4. Presentación del modelo teórico	116
Cuarta Parte	118

Aspectos metodológicos de la investigación	118
1. Contrastación de la hipótesis.....	118
2. Población y muestra	119
3. Análisis de las variables.....	120
4. Localidad e institución donde se desarrolló la investigación.....	122
5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	122
6. Metodologías empleadas	123
7. Aspectos administrativos.....	124
Conclusiones.....	126
Recomendaciones.....	130
Bibliografía.....	134

RESUMEN

El presente trabajo de investigación refleja el problema de temporalidad y de costo que ocasiona el trámite del proceso penal de faltas por lesiones debido a un formalismo exagerado que no garantiza la tutela de derechos de la víctima y tampoco garantiza un nivel de eficiencia de parte del sistema jurisdiccional, así mismo se propone un procedimiento especial y único para atender este tipo de casos cuyo eje será privatizar un aspecto de este proceso penal, el cual en la actualidad se expone como “Acuerdo Reparatorio” que permitirá que la víctima pueda acceder a una mejor acción en la tutela de sus derechos afectados por el agente activo.

Palabras clave: Proceso penal, lesiones, faltas, formalismo, acuerdo reparatorio, temporalidad, proceso único, eficiencia.

ABSTRACT

The present research reflects the problem of temporality and cost that causes the process of criminal penalties for injuries due to an exaggerated formality that does not guarantee the protection of the victim's rights and does not guarantee a level of efficiency on the part of the system. jurisdictional, likewise a special and unique procedure is proposed to attend this type of cases whose axis will be to privatize an aspect of this criminal process, which is currently exposed as a "Reparatory Agreement" that will allow the victim to have access to a better action in the protection of their rights affected by the active agent.

Keywords: Criminal process, injuries, faults, formalism, reparatory agreement, temporality, efficiency.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de elementos penales aplicables en un proceso judicial suelen tener una perspectiva de evaluación tradicional, sobre la cual se perfila el análisis de un “delito” o de un “elemento criminológico”, sin tomar en cuenta que ambos elementos son sólo un aspecto de un problema que se evalúa en el ámbito judicial.

Esto suele suceder en el contexto jurisdiccional en la especialidad penal y en particular en el ámbito de la acción de los Juzgados de Paz Letrados en la mayoría de Cortes Superiores de Justicia en el país, principalmente porque existen factores endogámicos que limitan la evaluación de otros elementos teóricos.

Así se relativiza en el ámbito jurisdiccional penal, elementos de estudio propios del Derecho Civil o del Derecho Constitucional, en particular para cumplir los fines de la pena o para ejecutar un procedimiento que principalmente se limita a la evaluación de una responsabilidad penal sin tomar en cuenta otros elementos que podrían ser mucho más incidentales, por ejemplo.

Así, la “evaluación económica” en la participación de un proceso judicial no es valorado en el ámbito judicial nacional principalmente a la ponderación de factores y elementos de naturaleza penal y procesal penal.

Elementos que en complemento con la escasa visión de “atención del problema principal, secundario o factores complementarios” limitan al justiciable que se encuentra en un proceso judicial, sea como “víctima” o esté participando como “Agente activo de un presunto delito”, por haber sido sindicado como “autor” de un delito.

De este modo no se valoran elementos económicos ni temporales en la atención de un proceso judicial y esto puede provocar que el mismo proceso judicial tenga una condición negativa en el trámite ordinario, porque el expediente judicial provocará un “tiempo” y un “costo económico” superior al “daño” en evaluación.

Situación que se presenta en el análisis del “Delito de Lesiones”, el cual es determinado en dicho ámbito genérico porque en esencia dicho parámetro abarca dos sub elementos, porque en algunos casos el “delito de lesiones” debe ser tramitado en un proceso formal en el ámbito jurisdiccional especializado y en otros casos como una “falta” y la incidencia en el “daño” provocado en la víctima no siempre resulta favorable para el ciudadano afectado por un acto negligente, doloso o como consecuencia de un acto derivado de una persona.

La relación que puede surgir entre estas dos personas no siempre resultará favorable a la “víctima” por la coexistencia de varios factores especiales y complejos de evaluar: la titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, la evaluación pericial del “daño” materia de evaluación judicial así como la propia participación de las partes procesales en el tiempo y en el manejo de costos es un factor que no es frecuente en el estudio y ejecución de tesis para optar el grado académico de Maestro en Derecho con Mención en Ciencias Penales.

Inclusive su tratamiento interdisciplinario es escaso, conforme se podrá determinar en el ámbito de la ejecución de investigaciones similares.

La razón está vinculado al escaso margen de un “proceso judicial en la especialidad penal” por parte de las personas que participan en el proceso y es un error que materialmente puede ser solucionado, dependiendo de las circunstancias.

Ante ello, se plantea la evaluación del “proceso judicial de faltas en casos de lesiones que se tramita en un Juzgado de Paz Letrado”, conforme los parámetros expuestos en la determinación de las variables dependientes en la presente tesis, principalmente porque nos permitirá analizar la *situación de la atención de faltas devenidas de lesiones*.

De este modo, centramos la atención del “objeto de estudio” en la presente tesis pero que nos permite detallar el contexto superior a la evaluación del “proceso

judicial por tipo penal”, dado que consideramos que no es muy productivo el centrarse en la atención de un “proceso penal específico”, cuando en esencia el *problema institucional en el Poder Judicial* en la atención del servicio de justicia a favor de los ciudadanos es limitado.

Ante estas circunstancias es que se plantea el estudio y debate de un “tipo de proceso” para poder **reformarlo** para así hacerlo mucho más eficiente, tanto a favor de las partes que participan en el mismo, como también para hacerlo mucho más productivo en el ámbito institucional.

El Poder Judicial bajo estos parámetros requiere de una mejor visión de desarrollo porque no es suficiente el actual esquema de trabajo limitado a la atención de la *sobre carga procesal*, si es que previamente no se *estudia cada tipo de proceso en el ámbito judicial*, por lo cual existe una discordancia entre lo estipulado en la “ley” y lo que se “aprecia en la realidad”.

Ante este contexto, es que planteamos el análisis de la presente tesis.

PRIMERA PARTE

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1. UBICACIÓN

Las disciplinas jurídicas que se han empleado en la ejecución de la presente tesis, pueden ser detalladas en los siguientes ámbitos.

a) Derechos Humanos.

Principalmente por la relación y vinculación de los *principios constitucionales aplicables al proceso penal*, los cuales procuran incidir sobre manera en el propio desarrollo de un trámite judicial¹, en particular en defensa de las personas que forman parte de una controversia judicial, sea como víctima sea como imputado de un delito.

En este ámbito, analizaremos el contexto de las obligaciones internacionales, asumidos por el Estado para brindar *justicia* a los ciudadanos en un tipo especial de proceso judicial: el de lesiones, detallados en forma general sobre la base del estudio convencional a cargo de la CIDH².

b) Derecho Constitucional.

Respecto de la obligación del Estado de velar por el *bien común*, el cual es el elemento guía y objetivo máximo al momento de elaborar las políticas públicas en el país.

En este sentido, el Estado debe ponderar legislativamente y también socialmente, los *valores* sobre los cuales se establecen las condiciones

¹ COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1995) *Sistema judicial y derechos humanos*. Lima, CAJ, p. 56

² FERRER Mac-GREGOR, Eduardo (2012) *El control difuso de convencionalidad*. México, Fundación universitaria de Derecho, Administración y Política, p. 392

máximas y mínimas sobre las cuales se desarrollan tanto los ámbitos del Derecho Penal como del Derecho Procesal³.

c) Derecho Civil.

Toda vez que se analizarán “derechos disponibles”, principalmente por el análisis económico aplicable al contexto de la evaluación del “daño” en el ámbito de las “lesiones”.

En este punto debemos señalar que al formar parte del Poder Judicial podemos observar casos en los cuales las “denuncias” constituyen unas referencias económicas en las cuales el propio “trámite” genera una mayor valoración económica que el propio “resultado del proceso judicial” y ante ello conviene ejecutar una evaluación desde la perspectiva del *Análisis Económico del Derecho* y por ello la importancia de evaluar el contexto de la especialidad civil.

d) Derecho Procesal.

Para así poder evaluar dos ámbitos complementarios que permitirían la sustentación de la hipótesis de trabajo:

El análisis del “período de tiempo” que implica el desarrollo de un expediente que trate una denuncia de lesiones (faltas)⁴.

El análisis del “contexto patrimonial” que se desarrolla, el cual es derivado de la *evaluación jurisdiccional de los hechos de naturaleza penal*, principalmente respecto de las acciones de “reparación civil”.

³ UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (1997) *Derecho constitucional: perspectivas críticas*. Bogotá, Universidad de los Andes, p. 456

⁴ ACOSTA ORTÍZ, Rubén Darío (2013) *Derecho procesal garantista y constitucional: el derecho constitucional y los derechos fundamentales de la teoría garantista del derecho procesal*. Bogotá, CESJUL, p. 407

e) Derecho Judicial.

En particular para poder evaluar el contexto en el cual se desarrolla el “proceso penal” pero desde una perspectiva vinculada a la *gestión del despacho judicial* por parte de un juez que debe evaluar “procesos vinculados a la evaluación de las lesiones” en casos donde es manifiesto el hecho de que los *costos económicos* del proceso superan el “daño” en la víctima.

La evaluación temática de la práctica judicial se vincula en forma directa con el siguiente punto:

f) Políticas Públicas.

Para poder evaluar el verdadero contexto en el cual se debe diseñar la “ejecución de los procesos judiciales” para así poder optimizar el servicio mismo de Administración de Justicia⁵.

g) Responsabilidad Civil.

Sobre todo, respecto del análisis de los “daños” que se deben evaluar en el contexto judicial y donde este debe hacer un estudio particular sobre:

- Los hechos materia de análisis, según posición de cada parte.
- El “daño” y su propio mecanismo de evaluación, para así poder determinar el siguiente punto referencial.
- La valoración económica del “daño” para así determinar la “reparación” aplicable a favor de la víctima.

⁵ LAHERA, Eugenio (2004) *Política y políticas públicas*. Santiago de Chile, CEPAL, p. 94

h) Criminología.

Respecto del análisis del contexto social, cultural, económico y criminológico, que explica el método sobre el cual se estructuran las políticas públicas en el ámbito de la atención de servicios jurisdiccionales, donde se aplican las medidas punitivas de control social.

i) Finalmente se analizarán conceptos propios del Derecho Penal, entre los cuales se pueden detallar:

- El análisis del “daño respecto del bien jurídico.
- El análisis de los objetivos del proceso penal⁶.
- El análisis de la “responsabilidad” del agente activo del delito (faltas).
- El análisis de los “tipos de procesos” en el ámbito judicial.
- El análisis de los fines de la pena.
- La generación de las condiciones de punibilidad de determinados hechos, sobre la base de una valoración criminológica.
- El análisis de la victimología.

Elementos que, en forma complementaria, permiten el desarrollo de la investigación.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por nuestra actividad profesional en el Poder Judicial, en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en el Distrito Judicial de Lambayeque, podemos observar una serie de situaciones y condiciones en el ámbito jurisdiccional que nos permiten proyectar evaluaciones de naturaleza constitucional, penal, procesal penal y procesales.

⁶ RAMÍREZ CARVAJAL, Diana María y GUERRA MORENO, Débora (2018) *Aproximaciones a la justicia en el proceso judicial en Colombia*. Lima, Ibañez, p. 148

Sin embargo, nos ha llamado mucho una situación muy especial: el desarrollo de los procesos penales en el cual se evalúa el “delito de lesiones [descripción genérica]” los cuales al ser configurados en un procedimiento de faltas en dos niveles: Como lesiones dolosas y como lesiones culposas, nos permiten dilucidar una situación particular: la afectación a la integridad de una persona humana.

Una evaluación que resulta ser sumamente “limitada” en el trámite temporal frente al desarrollo del proceso penal, el cual puede durar entre cuatro a seis meses, sin que ello garantice la reparación al daño provocado, tanto en lo psicológico en la víctima como en lo económico, si pudiere esta condición ser determinada.

Como se puede detallar, frente a este problema hay dos factores que resultan sobre salientes en este contexto: la evaluación económica y la evaluación temporal del propio “proceso de lesiones”, el mismo que resulta disfuncional a los propios fines del Sistema Judicial⁷, respecto principalmente de la atención de derechos a favor de la víctima, que en estos casos suele tener una mayor carga negativa a su ya afectada integridad provocada por el agente activo del delito (falta).

Bajo esta situación, consideramos que el tratamiento de las lesiones si bien constituye una situación muy típica del ámbito penal y procesal penal, en algunas situaciones llega a generar una situación que nos permite plantear:

- a) Una situación gravosa en la víctima y otros familiares de la persona afectada porque el Sistema Jurisdiccional no toma en cuenta su “dolor” o “afectación” en el tiempo y ello se observa en el elevado nivel de casos en los cuales se registra el abandono procesal.

Un dolor que inclusive llega a generar una condición “permanente” respecto de la “lesión” inicial, por ejemplo, en situaciones de lesiones graves que han provocado *minusvalía*.

⁷ LOVATÓN PALACIOS, Miguel (2017) *Sistema de justicia en el Perú*. Lima, PUCP, p. 21

- b) Los recursos económicos, humanos⁸ y logísticos en el seguimiento de un proceso penal vinculado al trámite de una denuncia de lesiones (faltas) es sumamente elevado frente al contexto de la “reparación del derecho” de la víctima.

La víctima en estos casos no cuenta con un apoyo económico personal o familiar que le permita sufragar los honorarios profesionales de un abogado y si acude a un servicio de apoyo legal gratuito del Ministerio de Justicia, este no siempre es eficiente en el tiempo y en cuanto al daño provocado.

- c) La temporalidad entre la “lesión” propiamente dicha y el “procedimiento y proceso judicial” son totalmente opuestos y esto genera una situación que finalmente provoca la evaluación del propio Sistema Jurisdiccional, que Gonzalo Ruiz Díaz lo especifica para el caso concursal⁹ (civil-comercial) pero que puede ser extendido a la especialidad penal, por cuanto el contexto penal por sus propias condiciones y características resulta limitativo a la víctima de lesiones.

Las lesiones “leves” eventualmente ya son “superadas” en el ámbito físico de la víctima, pero el proceso judicial sigue en un trámite que eventualmente no ha sido iniciado en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial.

Ante este panorama, surge otro inconveniente en la evaluación temática de este punto: las pericias psicológicas no suelen ser correctamente evaluadas y genera un panorama mucho más complejo de análisis.

- d) El procedimiento de evaluación de faltas en casos de lesiones resulta sumamente complejo al requerirse la evaluación pericial que no suele ser inmediata, debido a la sobre carga procesal que se registra en el contexto

⁸ MOSELEY, Michael. “Vivir con crisis: percepción humana de proceso y tiempo. P. 267. En: *Revista del Museo Nacional*. Tomo 46, 1982.

⁹ RUIZ DÍAZ, Gonzalo. “El costo beneficio del sistema concursal”. P. 147. En: *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*. Año 2, Nº 3.

jurisdiccional y en particular en la evaluación pericial de estos expedientes, todo lo cual no genera una correcta impartición de justicia porque la víctima no recibe “justicia” en forma oportuna.

Señaladas estas condiciones, consideramos entonces que en una Maestría en la especialidad de Ciencias Penales sería conveniente analizar el contexto jurisdiccional en el cual se ejecuta el “tratamiento de las faltas por lesiones”, principalmente porque observamos un formalismo en el diseño del “proceso judicial” que no garantiza la tutela de derechos de la víctima y tampoco garantiza un nivel de eficiencia de parte del Sistema Jurisdiccional¹⁰.

Siendo esta nuestra apreciación del contexto problemático, planteamos la siguiente interrogante como pregunta problematizadora:

3. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

En la delimitación de la pregunta problematizadora, enfatizamos la descripción de estos “elementos de análisis” (variables):

- a) El contexto temporal de evaluación de un proceso.
- b) El contexto económico de evaluación al proceso judicial.
- c) El contexto de la proporcionalidad en la atención al “daño” provocado por la “lesión”.
- d) La oportunidad y contenido temático que evalúa el ámbito judicial para la determinación de una especialidad.

En el contexto del diseño de procedimientos jurisdiccionales en el Sistema Jurisdiccional, donde confluye la posición del legislador y la aplicabilidad de la norma por parte de los operadores jurisdiccionales (jueces y fiscales), planteamos “el problema como una pregunta”:

¹⁰ FIGUEROA GUTARRA, Edwin (2013) *Las sentencias del Poder Judicial sobre amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 211

¿Bajo qué parámetros se puede reformar el “proceso de las faltas por lesiones” para hacerlo mucho más eficiente en cuanto al “tiempo de trámite” y en cuanto a la “reparación del daño” ejecutado por el sujeto activo de la falta?

4. OBJETIVOS.

a) Objetivo general.

- Analizar el proceso judicial en el ámbito jurisdiccional penal de las faltas por lesiones, sobre la cual se pueden poner en contradicción los derechos de la víctima de acceder a una Tutela Judicial Efectiva en un plazo razonable y en términos económicos accesibles, que permitan detallar los elementos negativos y proceder a su reforma integral.

Este análisis permitirá la evaluación interdisciplinaria de la tesis.

b) Objetivos específicos.

- **Explicar** el hecho de que el actual proceso judicial en la jurisdicción penal de “faltas por lesiones” es sumamente lento en el tiempo y ello afecta a los justiciables (víctima y acusado) genera un trámite sumamente disfuncional respecto de la evaluación de medios probatorios y el “daño” ocasionado al Bien Jurídico tutelado de la víctima.
- **Determinar** el mecanismo teórico y aplicativo para sustentar la variación normativa del actual proceso penal de lesiones por faltas, para así redefinir su naturaleza procesal y mejorar su trámite temporal, proponiendo un proceso penal autónomo para el caso de las lesiones que constituyen faltas y así hacerlo expeditivo y tuitivo en forma inmediata.
- **Describir** los elementos que componen el procedimiento a ser formulado y detallado en la Tesis, por cuanto en el presente ámbito sólo se detallan las características generales del mismo.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS

Consideramos la justificación de nuestra propuesta porque el tratamiento de casos vinculados a la evaluación de los casos de lesiones que generan las faltas en los Juzgados de Paz Letrados de todo el país constituyen la causa procesal de mayor volumen, con lo cual se genera una sobre carga procesal sumamente compleja.

Es importante señalar que el beneficio social y jurídico de la propuesta, que se centra en la reducción de plazos procesales en la atención de casos vinculados a faltas por lesiones, con lo cual su trámite procedimental sería mucho más eficaz. El objetivo final es el beneficio a la institucionalidad del Poder Judicial, a los justiciables y a la mejora de la labor jurisdiccional.

Como consecuencia material de este punto, sostenemos que la proyección natural de nuestra propuesta es autonomizar estos procedimientos, con la implementación de una propuesta para optimizar el proceso que analiza las lesiones que constituyen faltas, para que así la carga procesal en el Poder Judicial en el caso de atención de procesos vinculados a faltas por lesiones, se reduzca significativamente tanto en el tiempo de trámite como en cuanto a su vinculación sobre sus efectos entre las partes y ante la sociedad.

Por tanto, la necesidad de encontrar un mecanismo jurisdiccional diseñado desde una política jurisdiccional nos permitirá “justificar” nuestra propuesta, al permitirse plantear un mecanismo idóneo tanto en la tutela de derechos de la víctima como en el ámbito institucional, generando una mejora en la legitimidad social del Poder Judicial y del Ministerio Público ante la comunidad.

Siendo estos los alcances de nuestra propuesta, consideramos que el tema propuesto reviste de importancia porque atenderá un porcentaje significativo de casos que actualmente se tramitan en la vía jurisdiccional de los Juzgados de Paz Letrados en todo el país y sólo la atención de estos expedientes permitirá que el Poder Judicial y Ministerio Público, en individual y también en el ámbito

institucional, respecto del Sistema de Impartición de Justicia podrán mejorar su trabajo e imagen institucional ante la comunidad nacional.

6. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Planteamos el desarrollo de la presente tesis sobre la base de su importancia, toda vez que actualmente la propuesta podría:

- a) Mejorar el ámbito jurisdiccional nacional, toda vez que son los Juzgados de Paz, los que por su propia condición y estructura no cuentan con recursos logísticos suficientes, los que tienen que desarrollar los “procesos judiciales de lesiones que constituyen faltas”.
- b) Mejorar el nivel de atención de las víctimas tanto en el tiempo como en el ámbito económico, para que así el “daño” provocado por el agente activo de la falta no se extienda a una responsabilidad del Estado respecto de la inatención a una situación dañosa y punible.
- c) Ampliar el margen de evaluación temporal y económica que exige el correcto trámite judicial, tomando en cuenta el valor máximo de impartir justicia como un deber proveniente de la propia regulación del contrato social entre el pueblo y el Estado.

De este modo, se plantea que la atención de los puntos interdisciplinarios en la evaluación económica y temporal de un proceso judicial de naturaleza penal pueda ser extendida a otros ámbitos jurisdiccionales y así poder plantear un verdadero proceso de reingeniería en las instituciones que conforman el Sistema de Impartición de Justicia en el país.

SEGUNDA PARTE

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL MARCO TEÓRICO DE LA TESIS

1. ANTECEDENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

En la ejecución de la investigación, hemos podido verificar que las Tesis que analizan:

- a) El ámbito penal.
- b) El ámbito criminológico.
- c) El ámbito de la Responsabilidad Civil en el contexto procesal penal.
- d) El ámbito del análisis económico del “daño” y de la “reparación del daño”.

No han sido analizadas en una única investigación.

Este panorama descriptivo es evaluado en la Tercera Parte, en la cual se detallan las Tesis que se han ubicado a nivel “Nacional”, a nivel “de trabajos ejecutados en el extranjero” y respecto de la “doctrina” aplicable al área de trabajo.

Como referencia general, el punto d) respecto del “Análisis Económico del Derecho”, en particular para ver la “evaluación económica” no ha sido atendido en ninguna tesis.

Inclusive este punto permite detallar que el profesor peruano Roger Yon Ruesta¹¹, profesor de la Pontificia Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura no ha tomado en cuenta esta situación en su propia tesis, a pesar de que tiene un

¹¹ YON RUESTA, Roger (2016) *Tesis "Interpretación constitucional de los delitos imprudentes: con especial referencial al tráfico vial y al vínculo 124 del Código Penal"*. Ubicado en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U2tBr0mfWgEJ:tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7904/YON_RUESTA_ROGER_INTERPRETACION_CONSTITUCIONAL.pdf%3Fsequence%3D1+%&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=pe Ubicado el 17/05/2018

“elemento constitucional” que analiza la perspectiva de tutela de derechos de modo superficial, dado que una valoración económica se hacía imprescindible en su trabajo.

Sobre este punto, también se informa que la Tesis Doctoral sustentada en la Universidad de Barcelona¹², tampoco desarrolla una evaluación económica y todo lo cual nos permite sostener el carácter novedoso de la presente Tesis.

2. MARCO TEÓRICO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN.

En la generación de la secuencialidad del Marco Teórico, se ha optado por desarrollar el siguiente esquema de trabajo, sobre la base de su vinculación temática en un orden de “generalidad” a “especificidad”.

¹² RETTING ESPINOZA, Mauricio Alfredo (2010) *Tesis “Análisis comparativo del tipo básico del delito de lesiones en España y Chile”*, para optar el grado de Doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona, España. Ubicado en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41562/1/RETTIG_TESIS.pdf Recuperado el 01/05/2018

CAPÍTULO I

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PROCESAL PENAL

El desarrollo de la presente tesis está enmarcado en el análisis interdisciplinario porque hemos podido identificar que el “problema” esencial en la evaluación, seguimiento y ejecución de un proceso judicial no está vinculado al contexto de la atención de un “tipo de proceso” sino a un contexto muy superior.

La atención de un elemento particular en lo sustantivo y en lo procesal no siempre genera una verdadera evaluación del verdadero nivel de *funcionalidad* del sistema judicial en su conjunto y por eso es necesario analizar una serie de elementos interdisciplinarios que en el caso de la presente tesis se centrarán en elementos de Política de Estado en el ámbito de la prestación del servicio público más importante: el de administrar justicia, conforme a los parámetros del artículo 138 de la Constitución Política de 1993.

En este punto, se analizará el contexto Constitucional y de Teoría de Estado que explica el modo en el cual el Estado se ha organizado para poder atender las necesidades del ciudadano en el ámbito judicial.

Solo de este modo, es posible evaluar el “proceso judicial” como parte de un servicio de impartición de justicia conforme los objetivos máximos de un Estado de Derecho democrático y social, por cuanto la legitimidad del Estado se sostiene en la atención de las necesidades básicas de sus ciudadanos.

Por ello consideramos que no es viable evaluar un “único proceso judicial, en forma específica”, porque ello haría ineficaz la evaluación del propio servicio de impartición de justicia, dado que los problemas estructurales son esencialmente los mismos.

Así la evaluación del “contexto general en el cual se desarrolla el servicio público de administrar justicia” puede ser *medido* en forma especial y particular para así

poder analizar los aspectos de la temporalidad en el trámite judicial y la *valoración económica* de las condiciones internas y externas del proceso judicial.

1. EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO JUDICIAL.

Desde la promulgación de la Constitución de 1993, el Perú ha podido observar dos procesos formales de reforma del Sistema de Administración de Justicia.

a) El emprendido por el Gobierno de Alberto Fujimori, bajo un formato que ha incluido:

a. La inserción en la Constitución del Consejo Nacional de la Magistratura¹³.

Dicho Órgano Constitucional Autónomo supliría en funciones a la Cámara de Senadores en el nombramiento de magistrados en los niveles máximos del Poder Judicial y Ministerio Público.

De este modo, el proceso de nombramiento de autoridades política podía ser ajeno al ámbito político y facilitaba la autonomía de las entidades del Poder Judicial y del Ministerio Público.

b. La inserción de la Academia de la Magistratura, la cual se convertiría en la entidad que capacitaría y actualizaría académicamente a los magistrados en el país.

c. La reforma del sistema procesal, con la promulgación de los Códigos:

- i. Código Penal en 1991.
- ii. Código Procesal Civil en 1993.
- iii. Código del Niño y del Adolescente en el 2000.

¹³ RUBIO CORREA, Marcial (1998) *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Tesis doctoral en la Pontificia Universidad Católica del Perú. P.332 y 339

- iv. Reforma de la legislación procesal penal (en varias oportunidades y en fechas diferenciadas)¹⁴
- d. La formalización y profesionalización de la carrera judicial y de la línea de carrera de los asistentes de función jurisdiccional.
- b) La reforma del sistema judicial emprendido en el Gobierno de Alejandro Toledo Manrique, con la CERIAJUS¹⁵, Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia.

Los resultados de dicho proceso de reforma han sido:

- i. La autonomía presupuestal del Poder Judicial, conforme la Ley N° 28821, la cual establece como condición la “coordinación” con el Poder Ejecutivo para ver la disponibilidad de presupuesto para la atención de los requerimientos del sector justicia, porque fue extendido en el ámbito de la Legislación de Presupuesto Público al Ministerio Público.
- ii. La Ley N° 28367 que regula la meritocracia judicial, sobre la base de la ponderación de los méritos profesionales de un magistrado respecto de los ascensos provisionales en el ámbito de su propia línea de carrera¹⁶.

Sin embargo, en ambos procesos de reforma de todo el “servicio de administración de justicia” no se han tomado en cuenta elementos de vital importancia, desde una perspectiva evaluativa en lo económico.

¹⁴ VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2001) *Adaptando la legislación penal de Perú a la Convención Interamericana contra la corrupción*. Lima, IDEI, p. 82

¹⁵ MINISTERIO DE JUSTICIA (2004) *La CERIAJUS: preguntas y respuestas*. Lima, Ministerio de Justicia. P. 27

¹⁶ GONZALES MANTILLA, Gorki (2009) *Los jueces: carrera judicial y cultura jurídica*. Lima, Palestra, p. 311

Así, el proceso de reforma judicial en cada una de sus etapas, no ha tomado en cuenta:

- a) El proceso judicial en cuanto a su nivel de **eficiencia** en la atención de los derechos e intereses de las partes procesales¹⁷.

Un elemento que ha incidido negativamente por ejemplo en la poca valoración del proceso de conciliación, tanto en su mecanismo previo al proceso judicial como en su etapa procesal, en las audiencias en el propio desarrollo de un expediente judicial.

En este punto, inclusive se puede detallar que la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, iniciado en el año 2017 no ha considerado oportuno “mantener” esta institución de carácter procesal por considerarla ineficiente respecto de la atención del “proceso en sí mismo”.

Un error de fundamento y de visión jurisdiccional, sin tomar en cuenta que la aplicación exegética y decimonónica de los integrantes de esta Comisión no podrían viabilizar la “finalización” de un proceso judicial (en el ámbito procesal civil) de modo eficiente en una etapa previa a la ejecución y fundamentación de una sentencia.

Un error que a la fecha (diciembre 2018) no ha logrado ser extendido en una legislación específica principalmente por el contexto político nacional que ha limitado la eliminación anticipada de la Conciliación en su etapa judicial y en su etapa Pre Judicial¹⁸.

- b) El proceso judicial no ha tomado en cuenta la participación de la “parte débil” en el trámite de su propio proceso.

¹⁷ HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson (2003) *Indicadores sobre administración de justicia: mapa judicial, presupuesto y eficiencia en el desempeño judicial*. Lima, IDL-PUCP, p. 110

¹⁸ LA LEY (2018) *El proyecto del Nuevo CPC y su intento de matar a la conciliación extrajudicial*. Ubicado en <https://laley.pe/art/5136/el-proyecto-del-nuevo-cpc-y-su-intento-de-matar-a-la-conciliacion-extrajudicial> Recuperado el 20/10/2018

En esencia, el proceso judicial no tiene una característica de ver el “conflicto personal” como un problema humano.

En este punto, corresponde analizar los alcances del III Pleno Casatorio Civil que ha regulado el “proceso de separación de hecho” en la cual determina que los *jueces deben evaluar los contextos personales y familiares en los procesos judiciales civiles*¹⁹ porque se corre con la premisa de generar sentencias que no garantiza la verdad de los hechos por cuanto se podría favorecer a una parte que ha actuado de mala fe procesal.

Un criterio sumamente referencial contenido en la Casación N° 4664-2010-Puno, es la determinación de la “realidad” de los hechos²⁰, el cual no sólo se limita al contexto jurisdiccional civil o de familia porque esto también se puede apreciar en los procesos judiciales laborales, comerciales, contenciosos²¹ y penales.

Por tanto, una evaluación de las “partes” conforme las reales situaciones materiales que atraviesan permitirían el mejor análisis del expediente sobre la base una optimización de elementos de evaluación en las pruebas periciales y en los procedimientos jurisdiccionales.

Un factor que también es evaluado en el ámbito jurisdiccional penal cuando se analiza el “contexto de la acción típica” y en dicha evaluación se analiza el “comportamiento” del agente activo del delito, por cuanto este resultado puede provocar que el “acto típico” no se convierta en delito e inclusive puede determinar la declaración de causas eximentes de responsabilidad penal.

¹⁹ CALISAYA MÁRQUEZ, Ángel (2016) *La indemnización por inestabilidad económica tras la separación de hecho: criterios para la identificación del cónyuge más perjudicado. Tesis para optar el grado de magister en la PUCP.*

²⁰ ALFARO VALVERDE, Luis (2011) *La indemnización en la separación de hecho: análisis del formante jurisprudencial y doctrinal.* Lima, Gaceta Jurídica, p. 13

²¹ HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis (2013) *Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales.* Lima, Grijley, p. 449

- c) El proceso judicial no guarda proporcionalidad entre el “tiempo de trámite” y el “procedimiento regulado en etapas temporales por la legislación procesal”²².

Un factor de incidencia sumamente importante en nuestro país principalmente debido al hecho de la *sobre carga procesal* que suele ser debido a las propias condiciones materiales del Sistema de Impartición de Justicia, donde el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional padecen de los mismos problemas estructurales, como:

- a. Escasos recursos presupuestarios para atender la logística del propio desarrollo de un proceso judicial²³.
- b. Escaso presupuesto institucional para atender el correcto funcionamiento del servicio de impartición de justicia.
- c. Escaso margen de disposición de recursos para cubrir la tasa de empleados que atiendan los procesos judiciales, tanto a nivel de magistrados como de personal de apoyo jurisdiccional.
- d. Reducido control legal sobre el desarrollo del propio proceso judicial²⁴, en particular porque resulta ineludible el seguimiento y cumplimiento de muchas de las disposiciones de carácter procesal.
- e. Escaso margen de punición ante las acciones temerarias o maliciosas de las partes litigantes²⁵.

²² MORALES GODO, Juan. “Aclaración y corrección de resoluciones judiciales”. En: *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*. Vol. 5, Nº 1, 2014.

²³ GARCÍA BELAÚNDE, Domingo (2004) *El Poder Judicial en la encrucijada*. Lima, ARA, p. 34

²⁴ VILLEGAS PAIVA, Elky (2013) *El agraviado y la reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 263

²⁵ CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL (2008) *Nuevos criterios para la determinación judicial de la pena*. Lima, Poder Judicial, p. 168

f. Mínimo control de la ejecución de la sentencia judicial.

En este punto, respecto del proceso penal se puede analizar situaciones como:

- i. No existe un mecanismo eficiente en el seguimiento de las condenas que no contienen un mandato de detención o encarcelamiento.

En estos casos las acciones que ejecuta el Poder Judicial resultan sumamente limitadas.

- ii. No existe un mecanismo o procedimiento administrativo a cargo de una dependencia o entidad que regule el control de las sentencias impuestas²⁶.
- iii. No existe el control de la atención de los Beneficios Penitenciarios en los condenados que acceden a dichos beneficios.

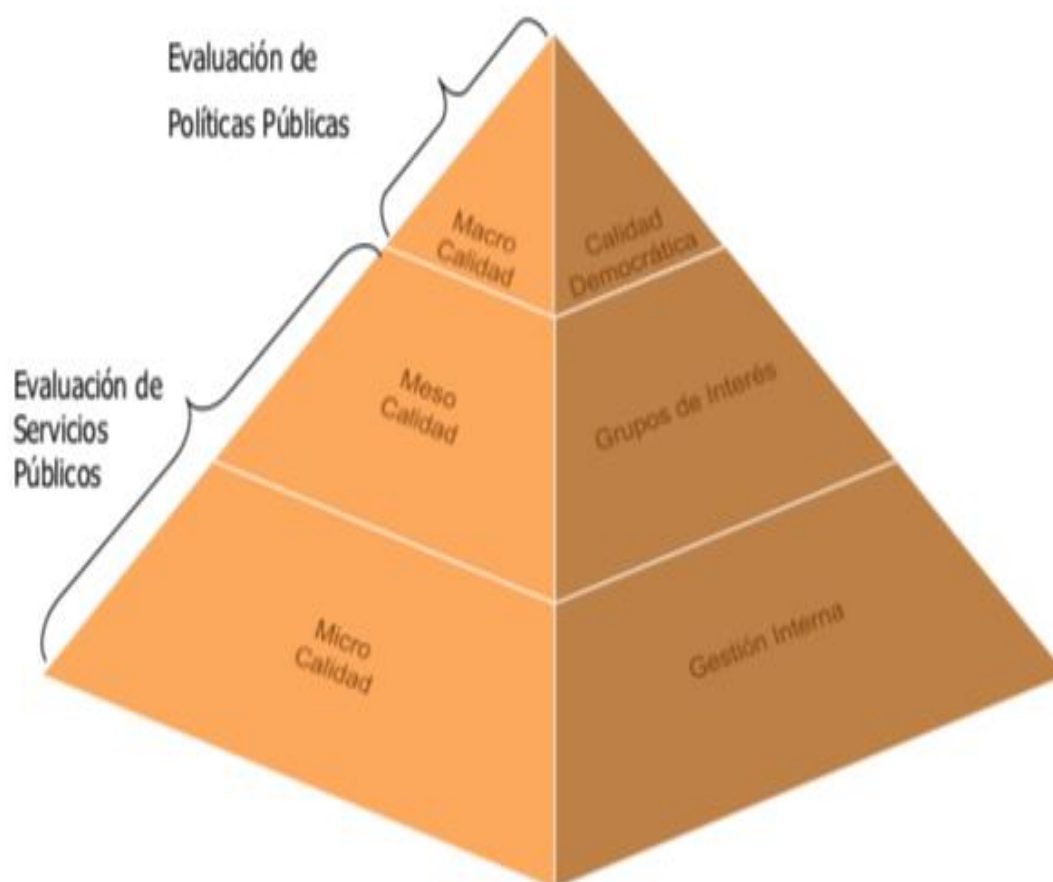
Ante este panorama, el servicio público entonces debe ser evaluado en función a su real dimensión: en cuanto al nivel de calidad.

Para ello desarrollaremos el esquema que ha desarrollado Bouckaert, conforme detalla la Guía para la Evaluación de la calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de la Presidencia de España²⁷, conforme al siguiente cuadro:

²⁶ GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. "Gobierno y Administración del Poder Judicial". P. 21. En: *Ius Et Veritas*. Año 8, Nº 14, junio 1997

²⁷ BOUCKAERT, G. (1995) *Citizens and consumers: and NPM dilemma*. P. 225-245. En: *Public Management Review*. Vol. 7, Nº 2.

Figura 1. Los tres niveles de análisis de la Calidad



Fuente: elaboración propia a partir de Bouckaert (1995)

Sobre este cuadro, entonces podemos detallar por el caso de la presente tesis:

- a) En el ámbito de la macro-calidad, se detalla la relación “Estado y comunidad”, y es donde se “mide” el servicio público por parte de la ciudadanía.

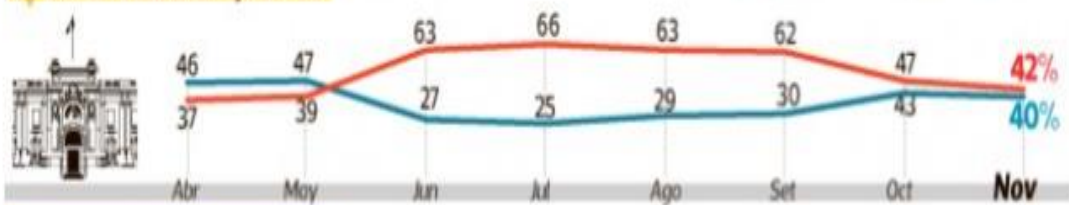
Se relaciona directamente con la ciudadanía y en nuestro país, el Servicio de Administración de Justicia es sumamente deficiente en términos generales, conforme se puede detallar en el informe de El Comercio²⁸:

²⁸ EL COMERCIO (2018) *Aumenta la aprobación del Poder Judicial, según encuesta Ipsos*. Ubicado en <https://elcomercio.pe/politica/aumenta-aprobacion-judicial-encuesta-comercio-ipsos-noticia-579216> Recuperado el 20/12/2018

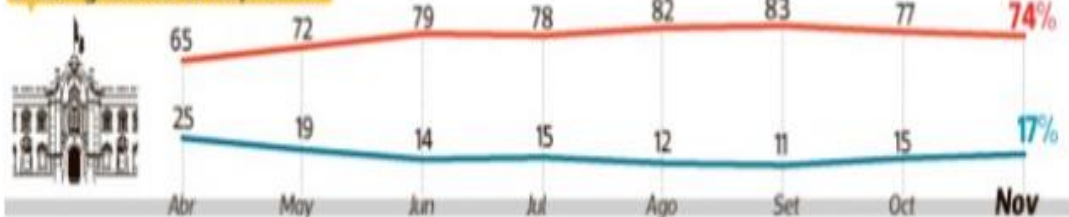
¿APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE...?

Base: total de entrevistados

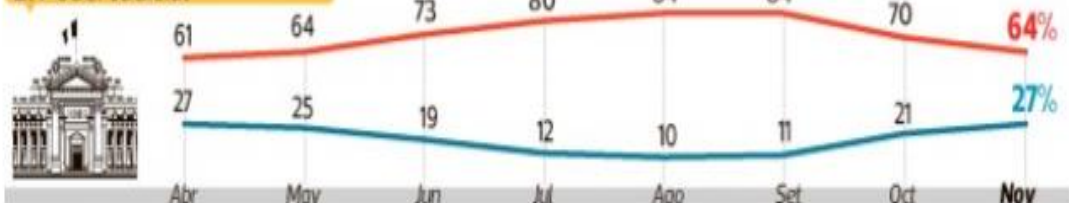
El Gobierno/Poder Ejecutivo



El Congreso de la República



El Poder Judicial



De 11% que obtuvo en setiembre, la aprobación del Poder Judicial pasó a 27% en noviembre, la misma cifra que tenía al inicio del actual gobierno. (Imagen: El Comercio)

En este contexto, el margen positivo del Poder Judicial ante la ciudadanía es sólo de 27%, lo cual califica de “servicio público deficiente” por parte de la ciudadanía.

De modo conclusivo este margen de evaluación “mide” las políticas públicas aplicadas en el ámbito jurisdiccional, los cuales provienen de los órganos Legislativo y Ejecutivo del Estado.

La evaluación de los márgenes de “creación, aplicación y desarrollo” de políticas públicas en el ámbito jurisdiccional implican el desarrollo de toda

la infraestructura institucional y normativa aplicable al trámite de un proceso penal²⁹, en el contexto del seguimiento de la presente tesis.

Este factor de evaluación debe ser mencionado porque en el ámbito jurisdiccional existen varias *especialidades* y si bien “todas” son calificadas en términos negativos, existen subdivisiones que implican una mayor condición negativa.

Así los márgenes de evaluación de la jurisdicción penal son los más elevados principalmente a causa del seguimiento de procesos vinculados al ámbito de delitos contra la administración pública.

La demostración de una pésima visión del servicio público provoca como elemento negativo la desacreditación de la democracia y este es un factor negativo en el país³⁰.

- b) En el ámbito de la meso-calidad, se hace evaluación de la relación “Poder Judicial – ciudadanía” y en ella se hace el análisis específico de la atención por el seguimiento de un proceso judicial.

En este ámbito se analiza la participación activa o pasiva de los ciudadanos en el trámite de un proceso judicial y los márgenes de evaluación son sumamente drásticos con el Poder Judicial.

Así la “corrupción” es sindicada como la principal causa de los problemas que existen en el Poder Judicial, sin tomarse en cuenta el contexto logístico, humano o administrativo que existe en la prestación de este servicio público.

Para el caso particular de las “faltas generadas por lesiones” en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz, en la presente

²⁹ MALDONADO PAREDES, Antonio. “¿Quo Vadis, Poder Judicial? p. 49 En: *Derecho y Sociedad*. Año 3, Nº 5, 1992.

³⁰ RUBIO CORREA, Marcial. “La reforma del Poder Judicial debe tener una dimensión política de la que no se habla”. P. 21 En: *Derecho PUCP*. Nº 62, 2009

tesis se detalla la encuesta ejecutada, que inclusive permite apreciar la percepción en el “seguimiento” de un trámite judicial no se hace de modo “directo” sino por intermedio de una tercera persona y ello permite hacer una proyección negativa sobre los mecanismos usuales en los cuales se puede pensar que se podría generar un acto de corrupción, que inclusive ha sido detallado por los encuestados.

El factor psicológico descrito ha sido analizado por Norma Contini de Gonzáles en un estudio interdisciplinario y permite evaluar el nulo análisis judicial sobre la percepción psicológica del “daño” en el trámite de un proceso³¹.

Este punto será descrito en la Tercera Parte de la Tesis y permite evaluar el verdadero margen de evaluación de los “ciudadanos” hacía el Poder Judicial.

- c) En el ámbito de la micro-calidad, se analiza el “seguimiento” de un proceso judicial, en el caso de la Tesis de las faltas generadas por lesiones en un Juzgado de Paz Letrado.

Ante este contexto se analiza el verdadero “impacto” que el ciudadano tiene sobre un “servicio de justicia”³².

Sobre este margen, se detalla:

- a. La evaluación del “tiempo” en el cual se tramita un proceso.
- b. El período de “satisfacción-insatisfacción” respecto del servicio prestado por parte del justiciable.
- c. La evaluación de los costos económicos aplicables al seguimiento del proceso.
- d. La determinación del resultado y su previsión (predictibilidad judicial)

³¹ CONTINI DE GONZÁLES, Norma (1997) *Investigación en evaluación psicológica e interdisciplinaria*. Buenos Aires, Psicología Clínica, p. 95

³² LÓPEZ GUERRA, Luis. “Consejo General del Poder Judicial y política de la justicia en España. P. 7. En: *Derecho PUCP*. Nº 55, 2002.

Ante este impacto, se debe detallar la elevada tolerancia a la corrupción, ineficiencia y mala diligencia en toda actividad estatal, conforme se puede detallar:



Tolerancia hacia actos comunes de corrupción

-Medición comparativa-

	Alta tolerancia					Tolerancia media					Rechazo definido				
	% Totalmente de acuerdo + % De acuerdo					% Ni de acuerdo ni en desacuerdo + % En desacuerdo					% Totalmente en desacuerdo				
	2004 %	2006 %	2008 %	2010 %	2012 %	2004 %	2006 %	2008 %	2010 %	2012 %	2004 %	2006 %	2008 %	2010 %	2012 %
Que un funcionario público favorezca a parientes y amigos	6	7	6	12	7	70	65	72	69	65	22	27	21	18	27
Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público	*	*	*	*	4	*	*		*	65	*	*	*	*	31
Pagar "propina" para que le perdonen una multa	3	5	3	4	2	69	67	78	76	64	26	27	18	20	34
Evadir impuestos si sabe que no lo descubrirían	2	1	1	2	2	71	69	80	77	66	25	28	18	20	32
Llenar documentos con datos falsos por conveniencia	0	0	0	1	0	66	65	74	76	64	33	34	25	23	36
Robar servicios públicos (agua, luz, etc)	*	*	*	*	0	*	*	*	*	62	*	*	*	*	38

(*) No se evaluó en años anteriores

 = Porcentaje significativamente más alto

Base: 5914 adultos

Dicho esquema de trabajo evaluativo nos permite detallar que el ciudadano no toma en cuenta el seguimiento de un trámite judicial en base a las reglas

de la buena fe procesal y por eso su evaluación de “cualquier proceso judicial” es muy negativa, a lo que incide el hecho de que un proceso de lesiones al no provocar un análisis muy complejo de un “expediente judicial” puede ser relativizado por los mismos ciudadanos que participan en él, sean víctimas o sean agentes activos del delito (faltas)³³.

En el caso de las “víctimas” si forman parte de un grupo vulnerable, el margen de evaluación negativo se incrementa en forma exponencial.

2. LOS SOBRECOSTOS ECONÓMICOS NO ASUMIDOS EN EL TRÁMITE JUDICIAL.

Complementariamente a los puntos expuestos en el punto precedente, el análisis que un ciudadano tiene sobre el seguimiento de un proceso judicial, está dirigido en la evaluación negativa de los siguientes puntos:

a) Elevado margen de corrupción.

Un detalle significativo que ha sido explicado en el punto precedente.

En el ámbito del seguimiento de un proceso judicial de faltas por lesiones este margen es sumamente irrelevante por cuanto los procesos no son complejos y pueden ser evaluados en un trámite medianamente corto en el tiempo frente al seguimiento por ejemplo de otros procesos penales, como en los casos donde se evalúan delitos contra el patrimonio o contra la libertad en el ámbito sexual.

Corresponde detallar en este ámbito, que todas las entidades del Estado, tienen un similar margen de evaluación negativa de parte de la ciudadanía, lo cual puede relacionarse directamente con la “calidad” del servicio que brinda el Estado peruano a los ciudadanos.

³³ PROETICA (2012) *VI Encuesta Nacional sobre percepción de la corrupción*. Lima, Proética. P. 20

b) Elevado margen de ineficiencia del servicio público³⁴.

Vinculado sobre todo al trámite de “expedientes complejos”, los cuales en el ámbito penal pueden implicar el seguimiento de casos donde participan “bandas criminales”, “casos complejos” o “evaluaciones periciales complejas” conforme se detalla en los tipos de procesos penales según el Código Procesal Penal.

Una referencia sumamente importante que nos permite detallar como elemento referencial el hecho de que los “procesos penales más complejos” suelen tener un nivel de evaluación diferente por parte del justiciable, principalmente vinculado al hecho de la poca maniobrabilidad de su participación en el proceso penal.

La participación activa del Ministerio Público resta facultades de intervención a la “parte civil” del proceso judicial y ante este factor es importante detallar que el registro de expedientes vinculados a faltas por lesiones en un Juzgado de Paz Letrado no presenta el mismo patrón referencial.

Eventualmente el margen de ineficiencia se vincula sobre todo al contexto temporal de la evaluación que sí resulta negativo respecto de los Juzgados de Paz Letrados, pero principalmente por factores de naturaleza institucional, logísticos y de recursos humanos (falta de personal en el ámbito judicial)

c) Elevado margen de desatención de las pretensiones o petitorios en el trámite judicial.

Vinculado sobre todo al contexto del margen de evaluación de la “reparación civil”³⁵ y como se puede detallar es un factor de naturaleza

³⁴ HERRERA GUERRA, Carlos. “Regulación administrativa tras la crisis del Estado regulador”. P. A1-A5. En: *Gestión pública y desarrollo*. Nº 31, febrero 2010.

³⁵ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “la naturaleza jurídica “civil” de la reparación civil en la vía criminal y su insostenible carácter accesorio en el proceso penal. P. 339.

económica que no puede dejar de ser mencionado principalmente por su alta vinculación con los márgenes de evaluación de “calidad”³⁶, conforme al primer punto del presente capítulo.

d) Incremento del Lucro Cesante por parte de las víctimas.

Un factor de naturaleza económica que incide sobre todo en la evaluación de:

- a. La asunción de un costo económico para abonar la remuneración del abogado que patrocinará el caso.

Eventualmente, los justiciables conocen muy poco sobre el servicio de “asesoría gratuita” que brinda el Ministerio de Justicia³⁷.

Esta información se desprende de las encuestas ejecutadas y a pesar de la elevada información jurídica existente sobre este servicio gratuito, las personas no suelen tomar en cuenta esta situación porque la participación en un proceso judicial ha sido circunstancial.

- b. La disminución de una “renta patrimonial” por la participación en un proceso judicial.

En este punto se debe tener en cuenta que la realidad socio económica de las personas que litigan en el Distrito Judicial de José Leonardo Ortiz en Chiclayo no son personas con un margen de ingresos económicos “alto” o “medianamente alto”, razón por la cual la mayoría de los encuestados ha manifestado que el “dejar de trabajar” a

En: CALCIN QUISPE, Néstor (2014) *Derecho penal y procesal penal: delitos de crimen organizado*. Lima, Grijley

³⁶ ARMENTA DEU, Teresa. “Algunas reflexiones en torno a la convergencia entre los procesos civil y penal y la deriva común hacia métodos extrajudiciales”. En: CACHÓN CADENAS, Manuel (2013) *La convergencia entre proceso civil y penal: ¿una dirección adecuada?* Madrid, Marcial Pons.

³⁷ ZÚÑIGA ESCALANTE, Jorge (2015) *Tesis “Defensa pública y acceso a la justicia constitucional de personas en situación de vulnerabilidad económica”*, para optar el grado de Magister en Política Jurisdiccional. P. 31

causa de una lesión les ha provocado un mayor daño patrimonial, que tampoco es valorado en forma específica como “Lucro Cesante”.

- c. La elevada situación negativa en el costo de oportunidad perdido a causa del seguimiento de un proceso judicial es un factor poco analizado por las partes procesales y esto eleva la condición negativa en lo oneroso de un proceso judicial.
- e) Escaso margen de rentabilidad en la “reparación civil”³⁸.

Un elemento sumamente importante, por cuanto desde el momento de la “denuncia” y el inicio del proceso judicial hasta la ejecución de la sentencia el margen económico de lo “positivo o negativo” no ha sido tomado en cuenta.

Con la fundamentación de la sentencia judicial que genera una “reparación civil”, el margen de atención al Lucro Cesante y al “costo de oportunidad perdido”³⁹ se genera una condición gravosa en contra del justiciable que es víctima de un delito o falta.

Un margen negativo que finalmente incide en el escaso margen de seguimiento judicial que ejecuta la víctima, principalmente porque debe atender de forma directa sus necesidades y ante ello se ve forzado a participar de modo pasivo o poco frecuente en el proceso judicial.

- f) El escaso margen de credibilidad del proceso penal.

A consecuencia de los puntos precedentes, es posible determinar que el ciudadano usualmente no confía en el sistema judicial y le asigna valores negativos a toda la estructura jurisdiccional del país, sin tomar en cuenta los elementos particulares o incidentales que eventualmente no son

³⁸ SACK RAMOS, Sylvia (2014) *La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal: ejercicio de la pretensión civil y reparación integral del daño*. Lima, IDEAS, p. 252

³⁹ AFFERNI, Giorgio. “La reparación del daño no patrimonial en la responsabilidad objetiva”. P. 203. En: *Ius Et Veritas*. Año 13, Nº 29, 2004

propios del tratamiento de un proceso judicial en un Juzgado de Paz Letrado, como el que ocurre en la presente tesis.

Así el factor “negativo” que se suele aplicar al Poder Judicial resulta desproporcional a la evaluación que desarrolla un Juzgado de Paz Letrado y corresponde detallar dicho elemento porque en esta jurisdicción es donde se analizan los casos de lesiones que generan las faltas.

- g) Magro margen de predictibilidad de resultados por parte de los ciudadanos y también de los propios órganos jurisdiccionales⁴⁰.

Un punto sumamente referencial en todos los procesos de “reforma judicial”, por cuanto incide materialmente en la evaluación de “calidad” que se efectúa al servicio de administración de justicia⁴¹.

En este punto, los márgenes de evaluación ordinarios a un proceso de lesiones que generan faltas en este contexto escapa al margen crítico que puede surgir en otros procesos penales, sobre todo los vinculados al ámbito de la gestión pública.

Por tanto, corresponde detallar que, en el caso de las lesiones en el ámbito judicial de un Juzgado de Paz Letrado, estos son mucho más predecibles y esto porque los jueces tienen un mejor margen de evaluación de la realidad contenido en el expediente judicial.

⁴⁰ ROIG TORRES, Margarita (2000) *La reparación del daño causado por el delito: aspectos civiles y penales*. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 22

⁴¹ ÁNGEL YAGUEZ, Ricardo (1995) *Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño)* Madrid, Civitas, p. 18

3. LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA PERSONA HUMANA QUE PARTICIPA EN UN PROCESO PENAL EN EL PODER JUDICIAL.

Conforme se ha expuesto en los puntos precedentes, la evaluación de los derechos de una parte procesal suele estar condicionados negativamente a una serie de factores que para el caso concreto de la presente tesis se limitarán al ámbito de la evaluación de las faltas generadas por lesiones.

Así en el caso particular de los expedientes atendidos en un Juzgado de Paz Letrado se pueden evaluar el daño a los siguientes derechos vinculados al ámbito procesal constitucional:

a) La afectación a la garantía del Debido Proceso⁴².

Respecto del propio trámite lento y oneroso que se genera en la tutela de un derecho en el caso se trate de la “víctima” de un delito de lesiones o de un procedimiento por faltas vinculadas a lesiones.

En este punto, la evaluación está vinculada sobre todo con el contexto en el cual se analiza el “período de tiempo del proceso” y el “margen económico” que implica su seguimiento.

Ambos elementos son incidentales y excluyentes en la afectación de la presente garantía procesal constitucional.

b) La limitación a la Tutela Judicial Efectiva⁴³.

Respecto del empleo del “tiempo” en el trámite de un proceso judicial.

⁴² RIO LABARTHE, Gonzalo. “La acción civil en el nuevo proceso penal”. P. 221. En: *Derecho PUCP*. Nº 65, 2010.

⁴³ SOSA SACIO, Juan (2010) *El debido proceso: estudios sobre derechos y garantías procesales*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 447

En este punto referencial, los procesos de lesiones que constituyen faltas seguidos en un Juzgado de Paz Letrado toman un período de tiempo superior en un 50% al período en el cual se debió tratar el proceso conforme a ley y en un 140% respecto del “daño” evaluado en el expediente judicial.

Estos márgenes numéricos provienen del análisis del trabajo de campo con el estudio de los expedientes del Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en Chiclayo.

c) La atenuación de la garantía del acceso gratuito a la justicia.

Vinculado sobre todo al gasto económico asumido en la atención de un proceso judicial por parte de la “víctima” que ve incrementar el daño a su calidad de vida cuando deba actuar ante el órgano jurisdiccional.

El incremento de los gastos económicos que se suman al “trámite” del proceso judicial se amplían negativamente cuando se analiza el contexto del Lucro Cesante.

d) La atención del “plazo razonable” en la atención de un proceso judicial.⁴⁴

Un factor que autónomamente debe implicar el análisis de la:

a. Sobre carga procesal.

Un factor de naturaleza administrativo institucional que incide sobre manera en el verdadero contexto de atención del servicio de justicia a favor de una persona.

b. Complejidad del trámite.

⁴⁴ CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994) *La tutela judicial efectiva: derechos y garantías procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución*. Madrid, Bosch. P. 442

Atenuado en el contexto del análisis de casos vinculados a las lesiones pero que eventualmente puede provocar un contexto negativo cuando el margen de evaluación es complejo debido a la propia naturaleza del caso.

d. Elevada acción maliciosa o temeraria de las partes.

Vinculado al contexto sobre todo de la participación de la parte “acusada” de la comisión de un delito (falta).

e) La ponderación de la reparación del daño provocado como elemento penal y procesal penal en forma básica⁴⁵.

Vinculado sobre todo a la evaluación del “daño” en una instancia judicial y sobre la cual se determina la obligatoriedad de reparar dicha acción por parte del agente activo de la falta a través de la ejecución de la condena.

Elementos que en forma conclusiva nos permiten detallar la severa deficiencia del sistema jurisdiccional en el ámbito procesal penal, en forma general⁴⁶.

⁴⁵ BUNGE CAMPOS, Luis María (2004) *Las garantías penales y procesales: enfoque histórico comparado*. Buenos Aires, Editores del Puerto, p. 359

⁴⁶ MOLINA CÁCERES, Telmo (2012) *Enfoque de sistemas en el ordenamiento jurídico. Tesis para optar el grado de Maestro en la PUCP*. Ubicado en <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6961> Recuperado el 20/03/2018

CAPÍTULO II

EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS JURISDICCIONALES EN EL ÁMBITO PENAL

Tomando en cuenta que la ejecución de un “servicio público” depende de las líneas de trabajo de los órganos que conforman al Estado, en el ámbito institucional jurisdiccional estas políticas se deben sobre todo a la complementación de las acciones de los Tres Poderes Nominales en el país:

- a) Respecto de la participación del Congreso de la República.

Se debe evaluar el contexto de la regulación del ámbito normativo tanto en lo sustantivo como en lo procesal que son vinculantes al Poder Judicial⁴⁷.

En este ámbito, salvo las acciones de “iniciativa legislativa” que es remitido el Poder Ejecutivo, se observa que el Poder Judicial prácticamente no ha presentado ningún proyecto de Ley vinculado a la evaluación o reforma de un “tipo de proceso penal” o “procedimiento jurisdiccional”, conforme se detalla en el historial de Proyectos de Ley del Congreso de la República⁴⁸.

En el estudio del Libro “13 mitos sobre la carga procesal” de Wilson Hernández Breña, podemos observar que este panorama se genera porque existe una *percepción del propio Presidente del Poder Judicial* de que si presenta una “iniciativa legislativa”, su propuesta no será evaluada positivamente por el Congreso de la República o será cuestionada por el Poder Ejecutivo⁴⁹.

⁴⁷ PODER JUDICIAL, CONGRESO NACIONAL DE JUECES (2012) *IV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial*. Lima, Poder Judicial, p. 215

⁴⁸ CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Proyectos de Ley, evaluación por Proponente*. Ubicado en www.congreso.gob.pe, recuperado el 20/10/2018

⁴⁹ HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson (2007) *13 mitos sobre la carga procesal*. Lima, IDL, 2007. P. 56

Ante esta realidad, el Congreso de la República se muestra totalmente excluyente ante el Poder Judicial quien se ha visto auto limitado en su rol propositivo de iniciativas legislativas, a pesar de que registra el conocimiento objetivo de la realidad judicial del país.

b) Respecto de las acciones del Poder Ejecutivo.

Eventualmente el Ministerio de Justicia es el órgano de *asesoría legal* del Poder Ejecutivo y se encarga de diseñar la mayoría de las acciones de incidencia positiva y directa en el ámbito judicial del país.

Una medida que eventualmente se complementa con la propia interacción con el Poder Judicial pero que se establece sobre la base de márgenes absolutos a favor del Ejecutivo, como por ejemplo en el ámbito de:

a. El diseño del presupuesto institucional del Poder Judicial.

En este ámbito, si bien es cierto que el Poder Judicial puede “plantear” su propio presupuesto, este por lo general es limitado por la propia acción del Congreso de la República quien, desde la evaluación de los pedidos presupuestarios en la Comisión de Presupuesto, disminuye el monto que cada “pliego presupuestario solicita”.

Inclusive los fundamentos y esquemas de respaldo técnico no son tomados en cuenta cuando se trata del presupuesto del Poder Judicial.

b. El manejo y atención de los requerimientos presupuestarios y logísticos del Poder Judicial.

c. El manejo de la regulación de la línea de carrera del personal de apoyo jurisdiccional.

Ante estos elementos, es el Poder Ejecutivo quien finalmente puede contar con una mayor y mejor situación y condición de negociación ante el Poder Judicial ante cualquier requerimiento que este puede hacer.

c) Respecto del Poder Judicial.

Vinculado sobre todo a la atención de las “necesidades” jurisdiccionales que presenta y sobre las cuales debe generar una línea de atención a necesidades de diferente orden y prioridad.

Sin embargo, este nivel de atención es sumamente limitado por la acción de los otros dos poderes de Estado y por ello es que el presupuesto (a), el manejo de la línea de carrera judicial (b) y el detalle de la normatividad aplicable (c) son elementos excluyentes en el diseño de toda política pública en el ámbito jurisdiccional⁵⁰.

Sobre estos tres elementos es importante detallar que no incluimos la evaluación del Ministerio Público, porque esencialmente está mucho más condicionado negativamente ante el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, por lo que podemos plantear los siguientes puntos:

1. EL REQUERIMIENTO SOCIAL EN EL ÁMBITO PUNITIVO.

En el presente punto se desarrollará el principal elemento de aplicación del Derecho Penal en el ámbito del control social en la comunidad nacional.

Se tiene que entender que por “control social” el Estado no sólo emplea la ley sino también los “recursos sociales de control preliminar”, que son basados en la costumbre y en la práctica común aceptada por la comunidad.

⁵⁰ HARGUINDEGUY, Jean Baptiste (2013) *Análisis de políticas públicas*. Madrid, Tecnos, p. 285

Elementos que de forma directa y objetiva eliminan el concepto de “negociación y evaluación de costos económicos” en la defensa de un derecho o tutela de algún interés.

Un detalle sumamente importante que nos permite detallar la relación que tiene el Derecho Penal con respecto del empleo de los métodos económicos de evaluación que usualmente siempre ha tenido la “persona humana” en el trámite de su vida cotidiana porque la evaluación de opciones no se limita sólo al caso de “defensa de derechos” sino que también puede ser extendida a una amplia situación de posibilidades.

Similar situación se genera en el contexto social, donde la comunidad también ejecuta estos mecanismos de evaluación, principalmente en el ámbito de la determinación de sus condiciones económicas, sociales, políticas y culturales.

La evaluación económica por tanto es un factor *imprescindible* en la ejecución de cualquier actividad humana y por ello guarda una referencia con el Derecho Penal en los siguientes puntos:

- a) Permite la diferenciación entre “delito” y “falta”⁵¹.

Una referencia tan puntual como vinculante en el ámbito de la presente tesis por cuanto debemos detallar que:

- a. Lesiones graves, pueden provocar una evaluación punitiva mucho más drástica, principalmente por su relación con los hechos y el comportamiento del “sujeto activo del delito”.

Inclusive el orden procesal y la condena que eventualmente se pudiera imponer, se detalla el hecho de una valoración ponderada en estos niveles económicos.

⁵¹ PORTOCARRERO HIDALGO, Juan (2003) *Delitos de lesiones*. Lima, JPH, p. 144

- b. En el caso de las Lesiones leves⁵², se debe tener en cuenta el “efecto” del daño en la persona y su relativo “efecto negativo en lo económico”, el cual está determinado en **días de atención médico o clínico**.

Una perspectiva que permite en la evaluación de la Tesis partir por comprender que el “efecto económico” sí es analizado en la evaluación penal⁵³.

- b) El Derecho Penal se basa en la tutela de bienes jurídicos “significativos”.

La implicancia de un “bien jurídico” permite relacionar un efecto económico sobre un determinado derecho, interés, bien, expectativa o acto en particular.

Esta percepción de que sólo se puedan “tutelar” algunos elementos que existen en la comunidad permite el desarrollo de la terminología clásica penal que desarrolla el principio de que el Derecho Penal es *última ratio*.

- c) Permite controlar la intervención del Estado⁵⁴.

Bajo esta premisa, la evaluación que ejecuta la ley, respecto de la delimitación “delito/falta”, más la evaluación económica sobre un “bien jurídico”, se materializa la *intervención punitiva del Estado*.

Un elemento tan importante en el ámbito de la ejecución de la participación del Poder Judicial que permite en el desarrollo de la presente tesis la formulación del argumento de que sólo cuando un “hecho reviste una significación económica debe ser evaluado en un proceso judicial en la especialidad jurisdiccional penal”.

⁵² MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2009) *Tratado de derecho penal patrimonial: usurpación y daños: delitos-faltas*. Lima, San Marcos, p. 226

⁵³ TORRE MUÑOZ, Sonia (2013) *El proceso penal de faltas*. Lima, Grijley, p. 419

⁵⁴ OROS CARRASCO, Rodolfo (2014) *El derecho penal en la era de la postmodernidad*. Lima, Grijley, p. 427

Un detalle que se contradice de modo significativo con los elementos negativos, que el propio Poder Judicial, a nivel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte detalla⁵⁵:

- a. Plazo temporal en la evaluación del expediente judicial.
- b. Una incongruente compensación por el “daño provocado” a favor de la víctima.
- c. Una condición limitada a un procedimiento que eventualmente no puede evaluar el “daño” en el tiempo.
- d. Un análisis jurisdiccional que omite la percepción de la “víctima” ante el daño que se le ha realizado.
- e. Un descrédito institucional al Poder Judicial por no brindar los mecanismos idóneos en la impartición de justicia.

Factores que en conjunto permiten justificar la presente investigación por cuanto la evaluación de un conjunto de expedientes que generan una *sobre carga laboral* en lo jurisdiccional, como es el caso de las *lesiones*, nos permite ubicar un mecanismo idóneo para reformular la ley y así mejorar la prestación del servicio de justicia en el país.

Consideramos que este punto es el elemento medular en la materialización de una investigación de Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias Penales por cuanto permite sustentar una posición teórica para que pueda ser aplicada en la realidad nacional, en particular en el ámbito jurisdiccional, tomando en cuenta que formamos parte del Poder Judicial y se necesitan mecanismos idóneos, novedosos y ejecutivos que solucionen

⁵⁵ BRAVO BASALDÚA, Roque (2012) *Tesis "Propuesta para mejorar la eficacia del proceso de faltas en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte", para optar el grado de Magister en Política Jurisdiccional en la PUCP.*

los muchos problemas que existen en el ámbito de la prestación del servicio público más importante brindado por el Estado: La Justicia.

- d) Permite mejorar la legitimidad del Estado en particular en su rol de Leviatán⁵⁶.

Al emplear los términos de Thomas Hobbes, debemos detallar que la construcción del *Leviatán* se hace como un antecedente constitucional y filosófico previo al *Contrato Social*.

El elemento precursor al Contrato Social sobre la cual el Estado se relaciona con la comunidad es justamente la creación el Leviatán expuesto por Hobbes y nos permite fundamentar la importancia del *acuerdo implícito* que existe entre el Estado y la comunidad política.

Sólo con la determinación de este elemento es posible comprender los valores de:

- a. Democracia, por cuanto una mala prestación del servicio de justicia en el país puede provocar un descrédito en el Estado, a través de la mala asignación de valores de eficiencia en sus entidades⁵⁷.
- b. Gobernabilidad, principalmente cuando se detalla la importancia de poder tener un método de *control social* contra algunos flagelos sociales, como la corrupción o la ineficiencia en el sector público.
- c. La estabilidad política, que resulta necesaria principalmente para poder generar los mecanismos idóneos para viabilizar un diálogo institucional entre los Poderes de Estado para así mejorar la calidad del servicio de justicia en el ámbito del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia (respecto de la defensa pública),

⁵⁶ BOBBIO, Norberto (1992) *Thomas Hobbes*. México, Fondo de Cultura Económica, p. 23

⁵⁷ GARCÍA SAYÁN, Diego (1991) *Poder Judicial y Democracia*. Lima, CAJ, p. 266

Ministerio de la Mujer (respecto de los Centros de Emergencia Mujer, que atienden muchos de los casos vinculados al ámbito de las lesiones) y Policía Nacional del Perú⁵⁸.

Frente a este contexto referencial en lo dogmático y social, se debe detallar que el *requerimiento social* de incrementar la intervención penal como control social, se ha debido principalmente a los siguientes puntos:

- a) Durante los últimos veinte años se ha evidenciado un incremento de la delincuencia.

Un nivel de delincuencia que ha provocado el incremento desproporcional de casos en el ámbito judicial, expresados en el incremento de la *carga procesal* (expedientes judiciales).

Un factor que se ha complementado sobre todo con el elevado nivel de violencia social que se ha podido observar en nuestro país, merced al complemento de factores exógenos e internos de la realidad nacional.

Así el incremento de la capacidad económica y potencialidad productiva del país ha permitido el desarrollo de nuevos delitos, que no se registraban en otras épocas o períodos de evaluación. Así surge por ejemplo el “delito de marcaje”, el cual desarrollan los *marcas*, principalmente en el ámbito del desarrollo de los delitos contra el patrimonio.

Igualmente, el incremento de la *violencia doméstica* es un factor que ha incrementado la carga procesal en el ámbito jurisdiccional penal, civil y de familia, no habiéndose mejor remedio que el observado en los últimos años en que todas las situaciones que incidan en la afectación de derechos contra la mujer, por su condición de tal, deberán ser tramitos en la vía jurisdiccional penal.

⁵⁸ GARCÍA BELAÚNDE, Domingo (2004) *El Poder Judicial en la encrucijada*. Lima, ARA, p. 108

Los efectos de la Ley N° 30364 en esencia han provocado que el nivel de atención de los expedientes con elementos de “lesiones” sean dirigidos a la jurisdicción penal y esto ha provocado un colapso en el sistema jurisdiccional.

b) El nivel de *calidad del servicio de justicia* ha disminuido en el país.

Una referencia objetiva basada en la premisa referencial: “justicia que tarda no es justicia”.

La evaluación temporal de un expediente judicial que toma un período de tiempo mucho más prolongado que la atención de la *lesión*, para el caso particular de la presente tesis, nos permite justificar y sustentar nuestra posición.

No resulta eficiente un proceso judicial que atienda casos sumamente breves en el tiempo, respecto del daño y que eventualmente **puedan ser atendidos de una mejor manera en la jurisdicción civil**⁵⁹, respecto de la reparación civil por el hecho dañoso.

En este punto no planteamos una crítica al Poder Judicial, sino al contexto jurisdiccional forzado por la Legislación nacional, porque finalmente la “opción política que determina la Ley” la ejecuta el legislador y el juez del Poder Judicial debe acatar.

Ante este problema, la atención de *problemas sociales vinculados a la atención jurisdiccional de lesiones leves*, genera las siguientes características:

a. Tiene un promedio de duración de aproximadamente 14 meses, conforme se detallará en el Tercer Punto de la presente tesis.

⁵⁹ CACHÓN CADENAS, Manuel (2013) *La convergencia entre proceso civil y penal. ¿Una dirección adecuada?* Madrid, Marcial Pons. P. 260

La evaluación entre:

- i. El tiempo de la denuncia.
- ii. El tiempo de atención a la denuncia.
- iii. La ejecución de actos procesales en el ámbito jurisdiccional.
- iv. La emisión de la sentencia.
- v. La ejecución de la sentencia.

Permite detallar que el “tiempo” es un factor que no guarda relación con el “daño” evaluado en el expediente en un Juzgado de Paz Letrado.

- b. Implica una *carga económica negativa* para el justiciable, el cual no se compensa con la reparación civil.
- c. Los *gastos y costos de oportunidad* implican un mayor nivel de afectación a los derechos y al ámbito económico de la víctima.
- d. El costo institucional que implica la atención de *procesos judiciales de atención a lesiones leves*, es sumamente elevado porque el Poder Judicial debe atender dichos expedientes como si fueran equivalentes a casos de lavados de activos, terrorismo o delitos contra la libertad sexual.

2. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL.

Para fundamentar la “hipótesis en la presente tesis, es necesario detallar algunos elementos teóricos que pre existen a la evaluación del “problema de la investigación”.

Ante este contexto es necesario entonces delimitar el modo en el cual se diseña la *política criminal en el Perú*.

En este contexto, en la doctrina⁶⁰ se detallan dos mecanismos de ejecución y planificación de políticas públicas en el ámbito punitivo.

Para poder desarrollar una mejor especificación, desarrollaremos un esquema que *hace un resumen* de los principales elementos aplicables a la evaluación, por cuanto este punto no es objetivo central en la presente tesis:

⁶⁰ BORJA JIMÉNEZ, Emiliano (2003) *Curso de política criminal*. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 323

Elemento de evaluación ⁶¹	Política Criminal 1⁶²		Política Criminal 2	
Diseño original	Construcción de Política Criminal basada en una proyección social		Ejecución de una política criminal basada en el contexto social	
	Legislación	Realidad	Legislación	Realidad
Objetivo ⁶³	Derecho Penal en última ratio	Mecanismos punitivos preventivos y disuasivos	Derecho Penal del Enemigo ⁶⁴	Mecanismos coercitivos de aplicación inmediata
Nivel de calidad ⁶⁵	Óptimo	Servicio público accesible	Deficiente	Servicio Público limitado
Nivel de atención temporal del requerimiento ⁶⁶	Eficiente	Procesos temporalmente racionales	Deficiente	Procesos judiciales extendidos en el tiempo
Nivel de atención al daño ejecutado	Eficiente	Reparación civil acorde al daño	Deficiente	El daño se incrementa a pesar de la reparación civil
Origen de los cambios normativos	Poder Ejecutivo	Iniciativa legislativa aprobada en el Congreso de la República	Congreso de la República	No se registran informes de evaluación social y criminológicos pre existentes
Nivel de legitimidad social	Alto	Garantizan el sistema democrático	Muy bajo	Generan conflictos sociales derivados

⁶¹ SOJO GARZA-ALDAPE, Eduardo (2006) *Políticas públicas en democracia*. México, Fondo de Cultura Económica, p. 24

⁶² UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (2012) *Cuadernos de política criminal*. Madrid, EDSA- Universidad Complutense de Madrid, p. 367

⁶³ HENRÍQUEZ AYIN, Narda (1997) *Políticas públicas y Estado*. Documento de trabajo, Materiales de Enseñanza en Administración, en la PUCP. p. 40

⁶⁴ PEÑA CABRERA, Alonso. "El derecho penal del enemigo y su influencia en la legislación penal nacional. p. 303. En: DEL CASTILLO, Alan y otros (2015) *Bases para un derecho penal latinoamericano*. Lima, ARA

⁶⁵ PRADO, MARÍA DEL CARMEN y otros (2018) *Implementación de políticas públicas: una antología*. Ciudad de México, Centro de investigación y docencia económica, p. 347

⁶⁶ CHAQUÉS BONAFONT, Laura (2006) *Redes de políticas públicas*. Madrid, Centro de Investigaciones sociológicas. P. 173

El resumen de la doctrina aplicable a la presente propuesta de “cuadro” nos permite detallar elementos muy importantes en la formulación de los “objetivos” y de la “hipótesis” de la presente tesis, por ello es que se ha ejecutado un *sistema de resumen teórico* empleándose varios textos de conocidos autores tanto en el ámbito criminológico, penal y procesal penal para así poder vincular los siguientes aspectos puntuales en el ámbito conclusivo del presente sub punto del Capítulo.

Estos elementos que son *conclusivos* en forma parcial, son los siguientes:

- a) En el Perú, la política criminal no tiene un *origen específico* a nivel de agente propositivo en una Iniciativa Legislativa.

Esto se debe principalmente al elevado uso del Derecho Penal como elemento represivo en el ámbito punitivo.

Como consecuencia de esta situación, las *leyes penales* que los jueces de la especialidad deben emplear resultan disfuncionales con la atención de la víctima y peor aún son disfuncionales con respecto del propio sistema jurisdiccional.

- b) El “origen” de toda reforma normativa en lo penal debería ser desde:

- a. El Observatorio de criminología del Ministerio Público, el cual previo informe técnico permitiría que la Fiscalía de la Nación proyecte Iniciativas Legislativas de reforma del proceso penal en el país,

Este punto nos permite detallar una mejor aplicación del concepto de “proceso judicial en el ámbito del juzgamiento del delito o falta sobre lesiones”⁶⁷.

⁶⁷ MACHUCA FUENTES, Carlos (2011) *Faltas contra la integridad física y el patrimonio*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 263

Los informes preliminares, permiten una evaluación técnica y no política del “problema social” en diferentes aspectos de una evaluación criminológica respecto del diseño de los mecanismos de control social.

La diferencia con el siguiente punto, radica sobre todo en el sustento técnico en el ámbito jurisdiccional.

- b. El Ministerio de Justicia, quien también cuenta con un Observatorio de Criminalidad.

En este ámbito, el Ejecutivo cuenta con la información proveniente de:

- i. Presidencia del Consejo de Ministros, quien sustenta todo el esquema de gobierno del país.
- ii. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.
- iii. Policía Nacional del Perú.
- iv. Gobiernos Locales y Regionales.
- v. Entidades del sector público.

Elemento técnico que le facilita la construcción de un esquema de trabajo programático, planificado y estructurado en niveles que puede inclusive determinar el método de ejecución de una reforma normativa de forma escalonada o parcial o definitiva⁶⁸.

Se diferencia del primer punto, respecto del Ministerio Público, por su elevado contenido político que si bien puede ser expuesto como elemento técnico no siempre guarda relación con el ámbito jurisdiccional por cuanto sólo mide una parte del problema y no las

⁶⁸ ROXIN, CLAUS (1998) *Dogmática penal y política criminal*. Lima, IDEMSA, p. 331

consecuencias materiales que el “resultado de la reforma pueda generar”.

Elementos que no se cumplen porque principalmente las *reformas normativas* se exponen primero en el Congreso de la República y de ahí se imponen a los demás cuerpos orgánicos del Estado.

Un error y defecto del propio sistema de evaluación⁶⁹ de la *cosa pública*, que nos permite justificar la vinculación con los preceptos de Hobbes, respecto de la mención del Leviatan.

Si estos elementos no son comprendidos, el factor que incide en una mayor crisis en el sistema jurisdiccional se puede explicar en el siguiente punto:

3. POLÍTICA CRIMINAL EN LA DETERMINACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL PENAL.

Se suele tener como premisa excluyente, en el ámbito procesal penal, que la *legislación penal* debe diseñar esquemas de “procesos judiciales por tipos de delitos”.

Un error usual que parte de la comprensión *amplia y general* del sistema jurisdiccional penal⁷⁰ y que nos permite detallar un aspecto específico en el ámbito del desarrollo de un “proceso especial”: el Proceso Inmediato.

Para poder explicar nuestra “hipótesis” en la presente Tesis, debemos detallar previamente un *elemento referencial* que es empleado como “ejemplo”.

Entonces la implementación del *Proceso Inmediato*⁷¹, nos permite detallar:

⁶⁹ ODUM, H. (1988) *Ecosistemas y políticas públicas*. Gainesville, University of Florida, p. 145

⁷⁰ TOCORA, Fernando (1990) *Política criminal en América Latina*. Bogotá, Librería del Profesional, p. 226

⁷¹ BAZALAR PAZ, Víctor (2018) *El proceso inmediato*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 51

- a) El hecho de que se trata de un “proceso especial” diferente al clásico formalismo *procesal y procedimental* detallado en el original Código Procesal Penal.

La autonomía de esta propuesta normativa nos permite detallar que el legislador sí puede materializar nuevos “tipos de procesos”, según las necesidades de la sociedad.

- b) El procedimiento para “abreviar” el proceso permite “eliminar” procedimientos en el trámite de un proceso judicial en la jurisdicción penal, por ejemplo, en el caso del Proceso Inmediato se han eliminado las fases de investigación preparatoria e intermedia.
- c) Con la implementación de este proceso se permite *mejorar la atención jurisdiccional* tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, por cuanto se atiende directamente al “trámite formal” de los procedimientos que son abreviados y permiten un *juzgamiento* mucho más célere.

En este punto, debemos detallar que no hacemos equivalente lo “célere” con algún elemento de “calidad” por cuanto sólo explicamos la lógica del legislador en la creación de un nuevo tipo de proceso penal.

Una lógica que inclusive incumple sus propias normativas administrativas y de procedimiento parlamentario impuesto por el Reglamento del Congreso de la República, conforme detalla Feliz Arias-Schreiber respecto del Análisis Costo-Beneficio en un Proyecto de Ley formulado por un legislador⁷².

⁷² ARIAS SCHEREIBER BARBA, FELIZ (2014) *Balance y perspectivas de la aplicación del análisis costo-beneficio ACB en los proyectos de ley del Congreso de la República del Perú*. Lima, Equis Equis, p. 311

- d) Se evalúa una acción de política institucional de *mejora de recursos humanos, logísticos y administrativos*, factor que incide materialmente en la propuesta de esta tesis.

Si se observa, este punto se relaciona directamente con el *objetivo general* de la presente tesis por cuanto permite una evaluación económica a un elemento jurisdiccional que provoca un severo inconveniente en la atención de los derechos de un ciudadano que ha sido víctima de un delito o de una falta.

La perspectiva de evaluación económica en este contexto, haciendo una evaluación comparativa con un ***proceso penal que ya está implementado*** permite la validación de nuestra propuesta en forma preliminar.

CAPÍTULO III

EL PROCESO PENAL Y LOS DELITOS IMPRUDENTES

Analizados los elementos teóricos aplicables al ámbito de la prestación de un servicio público, conforme a una relación entre la población con el Estado y detallado el contexto criminológico que explica el *origen de la legislación penal* en el Perú, se pasa a analizar el contexto “procesal penal” aplicable al contexto específico de los *delitos imprudentes*⁷³.

Esta especificación se hace en esencia porque los procesos judiciales, sean por delitos o por faltas, se desarrollan sobre todo en una vinculación porcentual con la incidencia de *situaciones de imprudencia*, esto es: expedientes judiciales que se originan debido a una acción ilegítima de un sujeto activo pero sin que exista una intencionalidad (dolo) respecto de las consecuencias materiales provocadas⁷⁴.

Por ello se requiere un análisis que explique un contexto “general”, el cual estará delimitado por el análisis del “proceso penal” en la actualidad, el detalle de la reforma estructural del proceso penal para enfatizar en el aspecto de la “oralización” que permite comprender el factor económico en la reforma institucional del proceso penal en nuestro país.

Referencia muy vinculante si tomamos en cuenta el paso del “Modelo Inquisitivo” del proceso penal detallado en el Código de Procedimientos Penales (ya derogado y fuera de empleabilidad en el sistema jurisdiccional nacional, en el caso de nuevos expedientes judiciales) con respecto del nuevo “Modelo Adversarial” que rigen por disposición del Código Procesal Penal.

A continuación, se analizarán los procesos y el tipo penal del Delito de Lesiones, conforme su estructura procesal y sustantiva para luego finalizar con el desarrollo

⁷³ BAZALAR PAZ, Víctor (2018) *El proceso inmediato: flagrancia, confesión sincera y prisión preventiva*. Lima, Gaceta Jurídica. P. 307

⁷⁴ ORE GUARDIA, Arsenio (2016) *El nuevo proceso penal inmediato: flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 104

de la determinación de lo que se observa en el ámbito jurisdiccional de los Juzgados de Paz Letrados en el país.

La descripción puntual de cada uno de estos elementos es porque son “variables” de orden complementario a los postulados en el Capítulo IV “Las lesiones como problema de política jurisdiccional” y en función a los objetivos específicos, se detallan en forma sucinta, razón por la cual sólo se ampliarán los dos puntos finales del presente capítulo.

1. EL PROCESO PENAL EN LA ACTUALIDAD.

El desarrollo del *proceso penal* en el Perú está vinculado al seguimiento de un Estado basado en el orden democrático y social, sobre la cual se estructura el *Estado de Derecho*, donde los principios de *legalidad* y vigencia de los principios procesales constitucionales aplicables al proceso penal tienen un carácter vinculante⁷⁵.

El desarrollo de un proceso penal permite entonces una apreciación complementaria de dos elementos referenciales que inciden en su propia estructura, tanto normativa como procesal:

a) El aspecto y fundamento constitucional⁷⁶.

Tomando en cuenta los valores máximos que se determinan en el cumplimiento de:

- a. La tutela de la dignidad de la persona humana, ante toda entidad pública y ante la propia comunidad.

Este valor es un elemento indiscutible de la propia democracia en el país y permite el sostenimiento institucional del Estado sobre la cual se

⁷⁵ GUERRERO, Alex (2013) *Detención, comparecencia y arresto domiciliario en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 349

⁷⁶ SALINAS MENDOZA, Diego (2012) *La publicidad del proceso penal como garantía constitucional*. Lima, Palestra, p. 83

desarrollan todas las políticas públicas que desarrollan servicios básicos en la comunidad.

b. La tutela de las libertades de las personas.

Sobre la base de la cual se tutelan en un orden de prioridades las “libertades” de la persona.

El esquema de trabajo económico y ponderación de valores referenciales en cuanto a lo social y cultural, inciden en la determinación de lo que es “tutelable en forma inmediata” en el país.

Sobre esta base, respecto de la Tesis, se debe señalar que en el caso de los procesos judiciales que atienden los casos de “lesiones”, se debe entender que se generan las afectaciones a la integridad corporal de una persona y por ello su incidencia deriva en dos métodos de evaluación⁷⁷:

i. Delito de lesiones, en caso la consecuencia o el “daño” provocado sea de consideración grave en la víctima.

ii. Falta por la comisión de una lesión en contra de la víctima.

c. La garantía del cumplimiento de las reglas del Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, conforme los artículos 2º y 139º de la Constitución.

En este contexto, conforme ya se ha detallado anteriormente, los principios de orden procesal constitucional viabilizan el desarrollo de un proceso penal y otorgan garantías que validan su ejecución, tanto a favor de la víctima, como de la propia parte “acusada” de haber cometido un delito o una falta, así como garantizan una correcta acción del Estado ante un problema social.

⁷⁷ PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2009) *Nuevo proceso penal: reforma y política criminal*, Lima, IDEMSA, p. 401

- d. La ponderación de un servicio de justicia que permita la legitimidad del Estado.

Sobre la base de lo estipulado en el artículo 138º de la Constitución, que detalla que el Poder Judicial administra justicia sobre la base de la delegación del poder que el pueblo le otorga.

Dicha vinculación es una referencia directa al “Contrato Social” que se estableció en la Revolución Francesa por el ideario de Rousseau que en esencia es el desarrollo puntual del *Leviatán* de Hobbes.

- e. La correcta vigencia del *bien común*.

Un elemento imprescindible en el ámbito de la gobernabilidad en el país porque permite que la población pueda garantizar la tutela de los derechos y bienes de significación relativa en la comunidad.

El desarrollo de este ámbito permite detallar una referencia que no se desarrolla en el proceso penal, principalmente porque el Estado se ha irrogado el seguimiento del mismo, no tomándose en cuenta el factor del “daño” que puede ser atendido de forma especial y diferente⁷⁸.

Para fundamentar este punto en la tesis se ha expuesto el caso del Proceso Inmediato, en el cual el Estado se ha visto condicionado a evaluar métodos de evaluación “efectivos” en el uso de recursos públicos para así “reducir” el trámite que se ejecuta en un proceso judicial.

La ponderación y referencia del bien común está en relación con el *uso de un presupuesto institucional* que no se da abasto para atender todas las necesidades sociales que usualmente se dan en el ámbito penal y

⁷⁸ MUÑOZ POPE, Carlos (2004) *Estudios para la reforma del proceso penal*. Panamá, Panamá Viejo, p. 113.

está demostrado en términos objetivos que el uso del proceso penal no logra:

- i. Atender en forma efectiva el daño provocado en la víctima.
- ii. Ponderar la reparación civil que se establece en la sentencia judicial, la cual en múltiples situaciones no llega a cumplirse.
- iii. Atender en forma eficiente el daño no cuantificado en el “delito o la falta” ejecutada en contra de la víctima.
- iv. Evaluar la ponderación de “recursos” con el uso eficiente de “elementos” en el ámbito jurisdiccional, que pueden ser “elementos humanos”, “elementos logísticos”, “elementos administrativos”⁷⁹

2. LA ORALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL: UNA FÓRMULA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para poder atender el contexto en el cual se ha presentado la investigación que proponemos como Tesis, debemos señalar que el cambio del esquema normativo que determina la naturaleza procesal del *proceso judicial en la jurisdicción penal*, es sumamente importante y así el elemento más característico del mismo, resulta ser el más referencial para explicar los objetivos de la presente Tesis.

Así la “oralización” del proceso penal es una evidente muestra de la acción de legislador que ha “optimizado” los recursos que se emplean en el ámbito de la impartición de justicia por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público⁸⁰ y ha modificado la estructura del proceso penal para así poder ejecutar el desarrollo de los siguientes puntos:

⁷⁹ REYNA ALFARO, Luis Miguel (2007) *La prueba, reforma del proceso penal y derechos fundamentales*. Lima, Jurista, p. 62

⁸⁰ GÓMEZ COLOMER, Juan (2014) *Los fundamentos del sistema adversarial de enjuiciamiento criminal*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 665

- a) El cambio de roles, respecto de una mayor autonomía institucional en cada entidad del Sistema de Impartición de Justicia.

Así el esquema tradicional en el cual el *juez ejecutaba la investigación y el juzgamiento* ha quedado derogado, con lo cual el “modelo inquisitivo” que tradicionalmente se ha empleado en el ámbito judicial del país ha quedado inutilizado principalmente porque este mecanismo genera una severa contradicción con los postulados de una mayor tutela de derechos del ciudadano cuando este participa en un proceso judicial.

Igualmente, la observación del cumplimiento de los principios y garantías de orden constitucional y procesal no podía cumplirse con el seguimiento del modelo inquisitivo, principalmente porque generaban en una única “persona”, la acumulación de *obligaciones funcionales* en el ámbito jurisdiccional.

Con el modelo adversarial del proceso penal en la actualidad, tanto el juez como el fiscal desarrollan “funciones” totalmente diferentes y autónomas, pudiendo sólo relacionarse cuando se ejecuta una participación en el propio proceso penal, ya sea con la evaluación constitucional de la actividad fiscal por parte del juez o porque el fiscal puede apelar a los elementos impugnatorios correspondientes para así elevar lo actuado a un órgano jurisdiccional superior.

El cumplimiento de reglas complementarias como el *debido proceso*, *tutela judicial efectiva*, *juez natural*, *doble instancia*, *plazo razonable*, *gratuidad del servicio*, entre otros principios y garantías, permite detallar que el *cambio de roles* respecto del modelo procesal vigente es a favor tanto de la víctima como de la propia “parte acusada”.

b) La evaluación económica que ha sustentado el proceso de reforma penal ha permitido, el desarrollo de los siguientes aspectos procesales⁸¹, que resultan sumamente útiles al momento de evaluar el contexto en el cual se propugna la presente tesis: la reforma del sistema jurisdiccional penal en cuanto a su evaluación económica:

a. La Terminación Anticipada del Proceso.

Es un método de “abreviación” del trámite judicial en el cual se estructura sobre la base de la aceptación de los delitos cometidos por el imputado y la previa coordinación con el Ministerio Público para la imposición de una condena.

Este es también un “procedimiento especial” conforme detalla el propio Poder Judicial, porque eventualmente permite que las acciones institucionales del Ministerio Público y Poder Judicial puedan tener mejor efecto en el ámbito jurisdiccional.

Para tal efecto, el propio Poder Judicial ha detallado los parámetros en los cuales se debe desarrollar este mecanismo procesal⁸².

b. El principio de oportunidad.

Un mecanismo empleado en el ámbito de la actividad fiscal y que responde de modo básico a una evaluación tanto penal como económica de un “acto evaluado bajo condiciones de antijuricidad”.

Eventualmente su empleabilidad ha sido materia de una necesaria *reglamentación* que ha sido ejecutada por el Poder Judicial⁸³.

⁸¹ MINISTERIO DE JUSTICIA (2014) *Protocolo de atención y orientación legal dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia*. Lima, Eurososocial, p. 46

⁸² PODER JUDICIAL (2014) *Protocolo de Terminación Anticipada del Proceso*. Lima, PJ, p. 142

⁸³ PODER JUDICIAL (2014) *Protocolo de Principio de Oportunidad*. Lima, PJ. P. 35

c. El acuerdo reparatorio.

Un mecanismo sobre el cual la *incidencia del daño y de la acción criminológica* es atenuada cuando se ejecuta una negociación entre la víctima y el agente activo del delito.

La atención inmediata del *daño provocado* sobre la base de una compensación económica que sea proporcional al daño ejecutado es sumamente vinculante con los alcances del presente proceso de investigación de Tesis, por cuanto viabiliza la propuesta de desarrollar un esquema de trabajo que permita que los casos de *lesiones que constituyan faltas* puedan ser derivados a una jurisdicción diferente a la vía penal.

d. El proceso inmediato.

Proceso judicial en la jurisdicción penal que ha sido tratada previamente.

Como se puede apreciar, existen elementos tanto sustantivos como procesales que pueden ser validados en la presente investigación que permiten formular nuestra “hipótesis de trabajo”.

3. EL TIPO PENAL DE LESIONES

La descripción del *proceso penal* aplicable al ámbito de la evaluación de “lesiones” nos permite detallar los siguientes aspectos centrales:

a) Respecto del bien jurídico afectado.

Está en relación directa a la *integridad corporal o psicológica de una persona* y suele vincularse a un contexto de *limitación* en el funcionamiento de las actividades orgánicas de una persona.

Las consecuencias del análisis de este elemento, determinan la naturaleza procesal a seguir, tomando en cuenta la condición de “delito” o de “falta” que se pueda desarrollar sobre la base de la evaluación del “daño” provocado.

Igualmente debe analizarse el contexto de la *función tuitiva* que la ley penal tiene en el ámbito de la ejecución de acciones típicas y que deben ser represivas porque ello implica también una función *teleológica* del proceso penal, vinculado al carácter preventivo de la acción punitiva en la sociedad.

Elementos que finalmente se dirigen a la “medición” de la responsabilidad penal del agente activo y que determina la “pena” a ser impuesta.

En el ámbito de las *lesiones leves*, el bien jurídico puede ser sumamente complejo de evaluar respecto de la *responsabilidad penal del agente activo* y de la *propia situación devenida en el daño*, el cual puede ser en el tiempo muy desproporcional a la evaluación preliminar con la que se determina el proceso.

En este punto, el registro de casos de *accidentes viales* permite la evaluación de casos que inicialmente fueron *lesiones graves*, pero que en el tiempo se han convertido en *lesiones permanentes*, y que eventualmente no adquieren la tutela de derechos a favor de la víctima porque la proyección de la reparación no es posible de ser ejecutada en forma anticipada.

Igualmente en el ámbito de los delitos de naturaleza imprudencial⁸⁴, las *consecuencias* de actos negligentes pueden ser mucho más graves que actos dolosos perpetrados por un sujeto activo y ello resultaría muy condicionado en una evaluación preliminar de los hechos.

⁸⁴ TABOADA PILCO, Giammpol (2018) *Delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y proceso inmediato*. Lima, Gaceta Jurídica, p. 449

- b) El seguimiento del principio de lesividad respecto de la intervención del Derecho Penal.

Un elemento material que *exige* el control de la intervención del Estado en un contexto privado o íntimo en el ámbito de las relaciones interpersonales de los ciudadanos en la sociedad.

En este contexto, no todos los *daños a la integridad personal* son configurados en el ámbito penal por cuanto buena parte de estos pueden ser *aceptados* por las mismas partes que asumen el cargo negativo de dicha acción en su propia integridad.

Así tenemos el caso de los actos que se desarrollan para ejecutar un tatuaje o eventualmente el acto derivado de una actividad deportiva.

La “nariz del boxeador” es una referencia puntual en este contexto, por cuanto es el propio deportista quien asume la generación de lesiones en su propio organismo y acepta los mismos, sin que se genere un nivel de responsabilidad penal o civil en la contraparte deportiva.

- c) La determinación de los *sujetos* que participan en el hecho típico.

En este ámbito, el proceso penal no suele tomar en cuenta la referencia del contexto familiar ni tampoco social que se genera en casos de las *lesiones*, por cuanto son los familiares quienes usualmente asumen el costo social de llevar el proceso judicial a favor de la víctima.

Esta situación se observa en forma constante en los Juzgados de Paz Letrados, en particular en la *zona donde se ha ejecutado el estudio*, el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz.

Inclusive este hecho se ha visto reflejado en el ámbito de las encuestas, cuando un porcentaje elevado de personas han registrado que no llevan un

proceso judicial, pero que han acudido al Juzgado para averiguar temas legales a favor de terceras personas, generalmente las víctimas.

Este hecho está detallado en el siguiente cuadro:

Pregunta	PREGUNTA	SI	NO
01	Tiene o participa en algún proceso judicial en este local judicial	87	13

d) La evaluación de los medios probatorios.

El análisis pericial en los expedientes a cargo del Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz permite detallar la referencia que estas actividades jurisdiccionales se desarrollan en una forma ajena a los objetivos y niveles de tutela que aspira conseguir la víctima de un caso de lesiones que constituyen faltas.

La atemporalidad en la cual se ejecuta la pericia, el nivel de evaluación económica sobre el daño evaluado y su vinculación con el contexto económico social en la zona de estudio, nos permite detallar que la actividad jurisdiccional en el manejo de medios probatorios es sumamente disfuncional en el ámbito de una evaluación económica.

4. LOS DELITOS IMPRUDENTES.

Dado que la mayoría de los procesos judiciales vinculados al ámbito del tratamiento de las *lesiones* se deben a casos de imprudencia, generalmente en la vía penal, conforme detalla Roger Yon Ruesta en su tesis “Interpretación constitucional de los delitos de lesiones con especial referencia al tráfico vial y al

artículo 124 del Código Penal”, podemos detallar algunos elementos referenciales que permiten sustentar el siguiente capítulo pero que deben ser detallados, conforme el siguiente esquema de evaluación:

- a) Respecto de la evaluación de la *capacidad de cometer una acción típica y antijurídica* por parte del sujeto activo de las lesiones.

En este punto, la importancia del análisis del “dolo” o “culpa” resulta referencial en la evaluación del resultado jurídico de un análisis porque incide materialmente en el desarrollo del proceso judicial.

- b) Respecto de los mecanismos de *evaluación institucional del proceso* en el ámbito penal, para eventualmente analizar la ejecución del “principio de oportunidad”, “el planteamiento o ejecución de un acuerdo reparatorio” o el desarrollo de una “Terminación Anticipada” del proceso.

- c) Respecto de la propia evaluación de las partes procesales.

En este punto se debe señalar que en múltiples situaciones la *víctima de lesiones* ***no participa del proceso penal*** principalmente por los siguientes factores:

- a. No cuenta con disponibilidad económica para el seguimiento del proceso como “tercero civil”.
- b. No cuenta con un auxilio de asesoría legal, sea por falta de recursos o por desconocimiento de la asistencia de la Defensoría de Oficio.
- c. No dispone de *un margen de acción autónomo* para el seguimiento constante del proceso judicial, dado que el *costo de oportunidad* es sumamente elevado y podría implicar el carecer de una fuente de ingresos económicos por participar del proceso judicial.

Elementos que en esencia son muy importantes en el análisis de la presente tesis.

CAPÍTULO IV

LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUNITIVA EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL CON RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES

El presente capítulo analiza en forma detallada el “problema” de la investigación, principalmente porque se aborda en forma directa y objetiva la evaluación de dos aspectos centrales en la determinación de los fines de la política penal en el país, centrado para el caso específico de los objetivos de la presente tesis en la realidad que se observa en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Los valores económicos detallados en la evaluación de los dos puntos del presente capítulo permiten detallar las principales deficiencias que existen en el contexto del diseño de:

- a) La política de atención de servicios públicos en el país.

Primera línea de trabajo del Estado que lamentablemente no se evalúa conforme un esquema objetivo de “medición” de resultados conforme los requerimientos sociales y la disponibilidad de recursos estatales.

Esta línea de acción incide materialmente en los dos elementos siguientes y la responsabilidad funcional no logra ser expuesta en ningún elemento bibliográfico que analice la “gestión pública” porque no se hace el análisis individual del “servicio de justicia”.

- b) La prestación del servicio judicial en el país.

Eventualmente no se toma en cuenta el verdadero impacto de la negligencia en la atención de los requerimientos sociales en el ámbito judicial.

La desproporción de órganos jurisdiccionales frente a algunos requerimientos permite sostener que el diseño de una atención de “calidad” en el ámbito jurisdiccional debe ser una empresa planificada por los tres Poderes de Estado en el país pero que, por razones presupuestarias, este diseño no se ejecuta en forma coherente.

Adicional está el elemento negativo de las condiciones negativas que debe asumir el Poder Judicial con respecto de su propia organización interna, toda vez que conforme se puede detallar en la Tercera Parte de la Tesis, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no ejecuta una debida evaluación de la *sobre carga judicial* y opta por la creación de nuevos juzgados sin tomar en cuenta la relación que existe entre “demanda” y “atención del servicio jurisdiccional” en el país.

Un defecto que incide sobre manera en el elemento económico.

c) La política punitiva en el país.

Principalmente debido a la elevada volatilidad de la variación normativa en el país debido al contexto que prevalece en el ámbito del Congreso de la República.

Así está demostrado que el legislador peruano no toma en cuenta el contexto criminológico nacional para el diseño de una verdadera línea de trabajo en el ámbito del diseño de una política pública en el ámbito punitivo y por ello es que se registran casos de normas penales propias del *Derecho Penal del Enemigo*.

Una disfuncionalidad del sistema en su conjunto que genera errores en el trámite de un proceso penal por cuanto surge una distorsión en la evaluación del expediente judicial en contra de los ciudadanos.

d) La determinación del proceso aplicable al ámbito de lesiones.

Conforme se detalla en los dos puntos siguientes:

1. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL “DAÑO” Y DE LA “TEMPORALIDAD” DEL TRÁMITE JUDICIAL.

La medición temporal de las “lesiones” en el ámbito jurisdiccional, conforme es determinado por la legislación penal, es sumamente deficiente, principalmente porque sólo se basa en un elemento: el informe pericial del médico legista.

Eventualmente, la determinación del daño en el ámbito judicial no toma en cuenta la ausencia de los siguientes elementos que usualmente se establecen en el ámbito de una “evaluación de rentabilidad de una acción humana”:

Nº	Acción	Elemento económico vinculado al trámite judicial
01	Evaluación del daño en términos económicos ⁸⁵	Determina el “valor patrimonial” del hecho típico en el ámbito penal
02	Evaluación del costo de oportunidad en el trámite del proceso judicial ⁸⁶	Implica la disponibilidad de recursos en el ámbito personal de quien debe ser parte de un proceso judicial ⁸⁷ . El daño se incrementa en la medida de las consecuencias negativas que asume la víctima
03	Evaluación de las costas y	La previsionabilidad de la disposición

⁸⁵ GHERSI, Carlos (1997) *teoría general de la reparación de daños*. Buenos Aires, Astrea, p. 38

⁸⁶ GHERSI, Carlos (2000) *Valuación económica del daño moral y psicológico: daño a la psiquis, categorización socio económica y cultural, prueba y procedencia, valor del ocio vacacional, modelos de cálculos, pautas jurisprudenciales*. Buenos Aires, Astrea, p. 245

⁸⁷ BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “temas de responsabilidad civil en debate: nuevas tendencias”. P. 422 En: *Ius Et Veritas*, Vol. 22, Nº 45, 2012

	costos del proceso (en forma total)	económica que se asume en el inicio del proceso judicial no son equivalentes a la evaluación final de lo dispuesto por el justiciable al final del proceso
04	Evaluación de la ejecución de acciones procesales que abrevian el proceso	La participación del Ministerio Público no siempre guarda coherencia con la atención al “daño” sufrido por la víctima, por ejemplo en la Terminación Anticipada ⁸⁸ .
05	Evaluación de los costos logísticos, administrativos y de recursos humanos en el trámite judicial (por expediente judicial)	<p>En este punto se debe detallar que “todo” expediente judicial implica la participación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El juez b) El equipo de apoyo jurisdiccional c) Peritos d) Personal de apoyo administrativo e) Personal de apoyo institucional <p>Un elemento económico que es equivalente a “cualquier proceso judicial” y permite detallar la</p>

⁸⁸ FISFALEN HUERTA, Mario (2014) *Análisis económico de la carga procesal del Poder Judicial*. Lima PUCP, p. 25

		<p>ineficiencia del sistema por cuanto no todos los “casos” o problemas sociales que se exponen en un expediente judicial son “equivalentes”.</p> <p>La importancia de este elemento es referencial a nivel institucional⁸⁹.</p>
--	--	---

2. EL ANÁLISIS ECONÓMICO APLICABLE AL PROCESO PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS LESIONES.

Como consecuencia de la evaluación de los puntos expuestos en el cuadro final del punto precedente, se puede detallar que el *sistema judicial* al momento de desarrollar el proceso penal que analiza un caso de *lesiones*, no toma en cuenta:

- a) La empleabilidad de los recursos humanos en el ámbito judicial.

Los costos institucionales en la disposición de un juez (i) y de un personal de apoyo jurisdiccional (ii) implican un elevado uso de recursos económicos en el ámbito humano y no se toma en cuenta el nivel de atención o diligencia que se puede generar sobre un “expediente judicial” en forma específica porque en esencia todos “los expedientes son iguales”.

Ante este inconveniente, se deben agregar en forma disgregada, los siguientes puntos:

- a. El Juez dispone de una remuneración superior al del personal bajo su dirección.
- b. El personal jurisdiccional, si bien cuenta con una remuneración asumida por el Poder Judicial, no se incluye la participación de personal de apoyo *no remunerado*, en forma institucional, como suele

⁸⁹ DESCO (1976) *Costos de la administración de justicia*. Lima, DESCO, p. 133

suceder con el *personal del SECIGRA* o personal remunerado por el propio Juez, como son los asistentes.

- c. El abono de la remuneración de los peritos nos permite detallar que no existe el personal suficiente en la propia Corte Superior de Justicia de Lambayeque y por ello cuando se ejecutan *requerimientos de estudios y análisis de casos a nivel pericial*, estos toman un período de tiempo sumamente prolongado desde el requerimiento hasta su notificación al juzgado.

Por tanto, el uso de personal vinculado a este ámbito hace la referencia de que este punto es un elemento medular que no se vincula directamente con el uso eficiente de recursos que son aplicables al ámbito penal, como por ejemplo en casos de “Acuerdos Reparatorios”.

- d. El manejo institucional de las notificaciones en el ámbito judicial, reviste un severo problema que afecta a todo el ámbito judicial y fiscal en el país.

Las notificaciones no siempre pueden ser diligenciadas correctamente porque no existe una vinculación directa con la participación de una persona en el proceso judicial.

Así una persona acusada de haber cometido un delito puede no informar sobre su domicilio y con ello se genera una acción maliciosa que no reviste ninguna sanción en el ámbito del juzgamiento.

Elementos que en su concepción y tratamiento complementario permiten detallar que la *evaluación económica* en el seguimiento de un delito de lesiones es sumamente deficiente y permite detallar la importancia del “título” de la presente investigación para así poder explicar las razones por las cuales no se ha incidido en la descripción del “tipo penal de lesiones” ni en el “procedimiento judicial” aplicable a dicho contexto procesal.

Este elemento referencial nos permite entonces detallar la incidencia del “problema de estudio”, de los “objetivos de la tesis” y del “título de la investigación”.

CAPÍTULO V

HIPÓTESIS DE TRABAJO EN LA TESIS:

PLANTEAMIENTO DE LA REFORMA DEL PROCEDIMIENTO EN FUNCIÓN A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRUEBAS EN PROCESOS DONDE SE ANALICEN FALTAS POR LESIONES

En la formulación de la “hipótesis” en el Proyecto de Tesis, el cual fuese aprobado en su oportunidad, se planteó el siguiente fundamento:

Sí se reforma el actual proceso de las lesiones que constituyen faltas, **entonces como efecto** es posible ejecutar el proceso penal en un plazo temporal muy breve, tutelando los derechos de la víctima, no generando una sobre carga judicial y resguardando los derechos del imputado (economía procesal y plazo razonable)

Ejecutada la investigación, sobre la base de las acciones de:

- a) Evaluación del Marco Teórico aplicable a la investigación.
- b) Verificación del contexto problemático y la identificación de un “período de evaluación” y “zona de evaluación” que involucre la ejecución de una sistematización de información documentaria en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en la ciudad de Chiclayo en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
- c) Ejecución de entrevistas a especialistas en el ámbito económico, financiero y contable para evaluar el “método” de análisis económico aplicable a un contexto de investigación penal (en el ámbito jurídico)
- d) Una encuesta, sobre la cual se ha evaluado a los “ciudadanos” la evaluación económica de sus propias acciones en el ámbito procesal y en las instancias judiciales.

Se puede formular una posición sobre el “Problema de la Investigación”, la misma que permite el desarrollo y sustento de nuestra Hipótesis, la misma que ya no es “hipotética” sino es “definitiva”, sobre la base de los siguientes alcances:

a) Respecto de la propuesta de crear un *tipo de proceso especial y único* para atender casos vinculados al ámbito procesal de las lesiones que constituyen faltas, consideramos que **sí es viable esta propuesta**, y se sustenta en los siguientes puntos referenciales.

a. No genera ningún límite o inconveniente en el ámbito procesal a nivel legislativo.

En este ámbito se puede sostener que el legislador ha planteado la *autonomía* de determinados “procesos” respecto de su trámite y desarrollo.

En este ámbito se citan los casos de:

i. Filiación y generación de una prueba biológica para determinar la filiación.

En la actualidad este procedimiento judicial está determinado por la Ley N° 30628.

ii. Acumulación del proceso de filiación con la petición de alimentos.

Este procedimiento está determinado por la Ley N° 29821, mejorándose ambos procedimientos que implicaban dos instancias judiciales diferentes y métodos jurisdiccionales autónomos.

b. En el ámbito procedimental y procesal tampoco se genera algún inconveniente en la implementación de la propuesta, por cuanto la

facultad del legislador se sustenta con el fundamento teórico expuesto en la presente tesis.

- c. La propuesta permite una mejor evaluación del contexto económico aplicable al análisis de “derechos”, “intereses” y “reparación de un daño en la comisión de una falta- delito”.

Propuesta que permite mejorar el trámite judicial cuando una “lesión” puede ser considerada de poca lesividad a la víctima.

Eventualmente también puede ser aplicada al ámbito de las “lesiones graves” por cuanto podría mejorar o anular la ejecución de una segunda acción judicial en la jurisdicción civil para así plantear la reparación civil.

- d. Permite la introducción de factores exógenos al proceso judicial en particular en la evaluación del proceso judicial como servicio público.

Estos elementos son:

- i. La evaluación económica, conforme la evaluación de valores de carácter y naturaleza económica.
- ii. La evaluación del factor “tiempo” en la ejecución de acciones de una persona.
- iii. La evaluación del contexto de “oportunidad” en el trámite de un proceso judicial.

En este punto se debe señalar que, sobre la base de las encuestas ejecutadas, ningún ciudadano se ha sentido “satisfecho” en la atención de recursos y tiempo en el trámite de un proceso judicial.

Igualmente, la evaluación de “puntos esquemáticos económicos” es muy deficiente tanto en el ciudadano como en el propio Estado y eso se demuestra en el nivel de “órganos jurisdiccionales” limitados por la sobre carga procesal.

Adicional también permite detallar que los niveles de evaluación de “eficiencia” y “eficacia” no son vinculantes en el ámbito jurisdiccional y no se toma en cuenta el “factor humano” en la atención de un expediente judicial⁹⁰.

b) Respecto de la sustentación del esquema básico del nuevo proceso.

Planteamos que este proceso se ejecute en cuatro niveles, cada uno de los cuales puede desarrollar un aspecto básico que lo representamos en el siguiente esquema:

Etapa I	Etapa II	Etapa III	Etapa IV
Ejercicio de la acción	Ejercicio de la defensa	Ejecución del trámite administrativo judicial a cargo del órgano jurisdiccional	Ejecución de la sentencia
Valoración autónoma del daño	Evaluación de costos económicos para limitar la acción estatal	Audiencia	
Perspectivas de atención inmediata del daño	Atención inmediata a la víctima en el daño provocado	Sentencia	
Evaluación institucional		Evaluación económica por parte del ciudadano / justiciable	
Mejora del proceso judicial	Propuestas legislativas de reforma del proceso judicial	Confianza en el sistema judicial	Atención de derechos en forma eficiente
Mejora de la imagen del Poder Judicial		Mejora del sistema de administración de justicia por el justiciable	

⁹⁰ KRESALJA, Baldo (2018) *De pies a cabeza: 150 días en el Ministerio de Justicia, 2004*. Lima, BKR, p. 23

c) Respecto del análisis económico de un trámite judicial, la propuesta de la presente tesis permite:

- a. Analizar y comprender en una dimensión objetiva y temporal, la participación del justiciable en un proceso penal.
- b. Evaluar las perspectivas de “costo de oportunidad” en el trámite de un proceso judicial, tanto para la víctima como para la parte acusada de haber cometido una falta- delito.

Dicho factor de evaluación se amplía positivamente en el Ministerio Público y el Poder Judicial, conforme a la actual legislación que desarrolla la “Terminación Anticipada del Proceso”, “Acuerdo Reparatorio” y puede atender de modo eficiente un daño vinculado al ámbito de las lesiones.

- c. Permite el análisis de la funcionalidad económica en el propio Estado, respecto del manejo presupuestario que se vincula con el “gasto administrativo de contratación de personal” que usualmente es considerado un factor referencial en el manejo de la carga procesal de expedientes judiciales.

TERCERA PARTE

1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO.

Tomando en cuenta las siguientes referencias:

Descripción	Detalle	Relación Población / Muestra
Región	Lambayeque	1 Región de 26 regiones en el país
Institución	Poder Judicial	Conforme al artículo 138 de la Constitución
Dependencia institucional	Corte Superior de Justicia de Lambayeque	I Corte de 34 Cortes Superiores de Justicia en el país
Órgano jurisdiccional evaluado	Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, Lambayeque	1 Juzgado de dos (mismo nivel, misma carga procesal)

El análisis estadístico de los expedientes desarrollados en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz comprendidos entre los años 2016 al 2017, conforme al siguiente esquema (a) y resultado de evaluación (b) es el siguiente:

Nº	Tipos de procesos	Expedientes
01	Delitos contra el patrimonio	320
02	Delitos contra la libertad (en el ámbito sexual)	20
03	Lesiones	308
04	Otros	54
	Total de Expedientes	702

En este punto, señalamos como fuente referencial:

- a) La Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial⁹¹.

Resolución Administrativa N° 248-2017-CE-PJ que ha hecho el análisis estadístico de la “carga procesal” en los Juzgados de Paz Letrados en el país, para así ampliar el número de los mismos en las diferentes Cortes Superiores del país.

Nótese que el período de evaluación de la Resolución Administrativa se ajusta al período de evaluación de la presente investigación de Tesis y permite su evaluación ante los cambios normativos del año 2018, los mismos que nos permiten hacer una mejor estadística porque es la “misma legislación en evaluación”.

Esta referencia se detalla en forma explícita.

- b) La información estadística del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema del Poder Judicial⁹²

⁹¹ PODER JUDICIAL (2017)) *Resolución Administrativa N° 248-2017-CE-PJ*, Ubicado en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c492ae0042c1b254a5cab5bcb58708b2/R_A_248_2017_CE_PJ+-+09_08_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c492ae0042c1b254a5cab5bcb58708b2 Recuperado el 20/20/2018

⁹² PODER JUDICIAL (2017) *Estadísticas por Corte Superior. Lambayeque*. Ubicado en www.pj.gob.pe Recuperado el 20/11/2018



Fuente: Página web del Poder Judicial.
Colaboración: Consorcio Justicia Viva.

Un cuadro que nos permite detallar los siguientes elementos:

- No se hace el análisis de la “ejecución de sentencia”, el cual es un elemento que la Tesis detalla porque los “cobros” de “costas y costos” son evaluados por el órgano jurisdiccional en evaluación.
- No se hace el detalle del “tiempo” o en años o en meses de la atención de los expedientes en el ámbito de “tipo de proceso”.
- No se detalla la referencia explícita sobre algún método de solución de controversia que no sea el aplicable en el ámbito jurisdiccional.

En forma complementaria se expone el siguiente cuadro:

Nivel jurisdiccional	¿Cuánto de la carga procesal se resuelve?
Salas superiores	69
Juzgados especializados	34
Juzgados de paz letrados	56
Nacional	55

Fuente: Página web del Poder Judicial.
Elaboración: Consorcio Justicia Viva.

- a. Sólo el 55% de la carga procesal de un Juzgado de Paz Letrado se resuelve en el “año de ingreso” del trámite judicial.
- b. La “demora” en la atención de un expediente judicial implica una carga negativa en las partes procesales, que se incrementa exponencialmente en la víctima de una lesión.
- c. No se registran datos estadísticos por “tipo o especialidad” del expediente judicial, pero el análisis y el cuadro en mención permiten detallar nuestra posición crítica frente al contexto problemático evaluado en la Tesis.

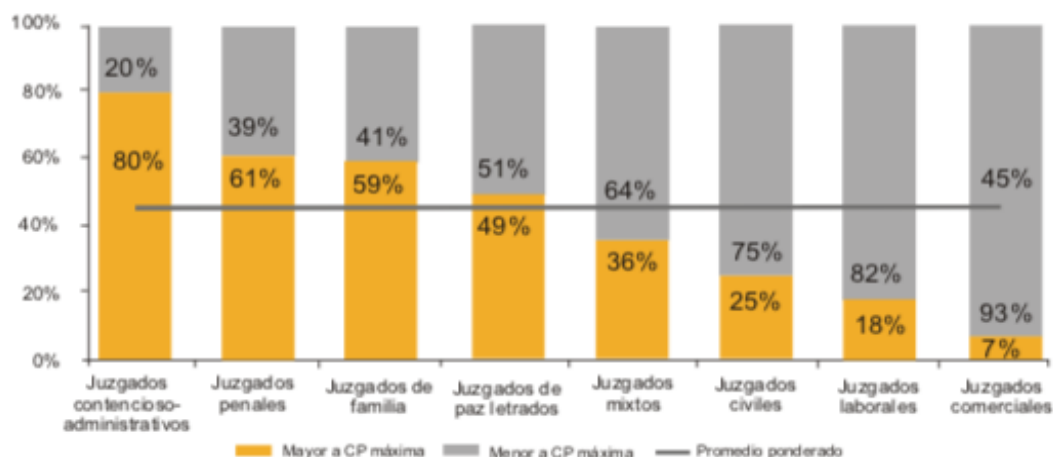
Téngase en cuenta que en los procesos de lesiones la denuncia es de parte y en esencia podría atenderse en una vía jurisdiccional civil, para así evaluar la atención médica o reparación económica.

- c) Información estadística de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Al respecto debemos señalar una referencia sumamente importante:

En el año 1996 se estableció el “método” estadístico para determinar la creación de “órganos jurisdiccionales” en el Poder Judicial y dicho contexto no ha sido modificado, conforme detalla Wilson Hernández Breña en su libro “13 mitos sobre la carga procesal”⁹³.

⁹³ HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson (2007) *13 mitos sobre la carga procesal*. Lima, IDL, 2007. P. 26



CP: Carga procesal.

Nota: El estándar de carga procesal máxima proviene de la resolución administrativa 108-CME del Poder Judicial (29 de mayo de 1996).

Fuente: Página web del Poder Judicial.

Elaboración: Consorcio Justicia Viva.

Un elemento de suma importancia que hasta la fecha (2018) permite fundamentar la relación “carga procesal/órgano jurisdiccional” que para el caso del área de trabajo de la Tesis, permite generar las siguientes especificaciones:

- a. La carga procesal en “exceso” de los órganos jurisdiccionales: Juzgado de Paz Letrado es del 51%

La sobre carga por expedientes por órgano jurisdiccional es una referencia que al final genera un “elemento negativo” en el trámite de un expediente judicial y el justiciable finalmente no logra evaluar su propia defensa en el ámbito económico porque implica un deterioro objetivo.

- b. El porcentaje resultante del punto precedente implica que debería existir “el doble” de Juzgados de Paz Letrado en la ciudad de Chiclayo en Lambayeque, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Al identificarse al Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en Chiclayo se ha procurado evaluar un contexto que

por ser una “muestra de estudio” bien puede generar los resultados “equivalentes” en otras realidades jurisdiccionales donde también se analizan casos de “lesiones”.

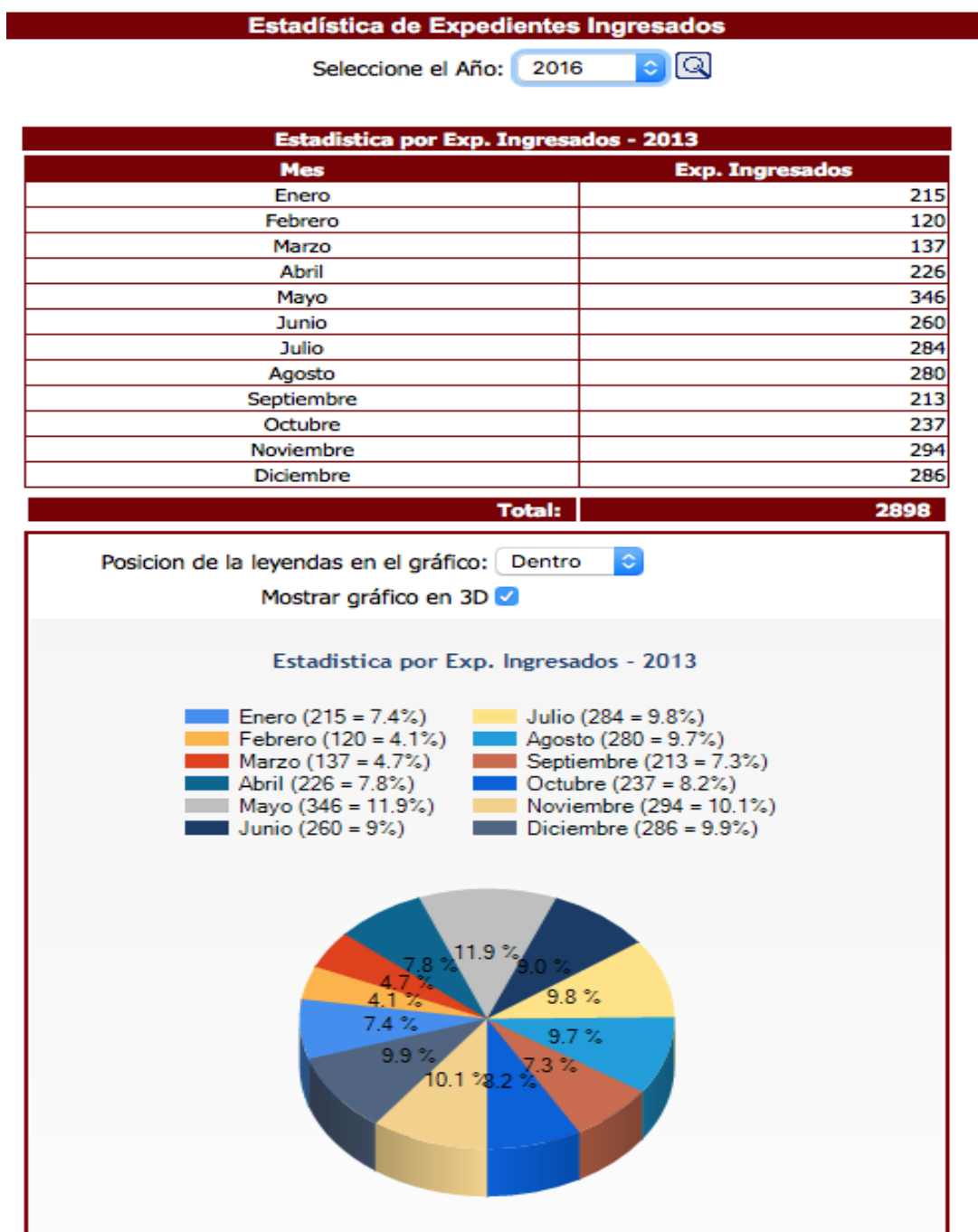
- c. El porcentaje en resultado permite detallar que el “personal” que se requiere para trabajar la sobre carga procesal es del “doble” del que actualmente se dispone.

El costo económico que debería asumir el Poder Judicial es sumamente elevado y ante este factor, nuestro punto de análisis es muy referencial en la Tesis.

Elementos estadísticos que nos permiten detallar:

- a. La carga procesal no se evalúa en función a los intereses y derechos de las partes procesales.
- b. La carga procesal implica una “limitación” funcional del Poder Judicial y esta institución tiene conocimiento de estos elementos, pero no dispone del presupuesto suficiente para poder ejecutar medidas de solución.
- c. La carga procesal provoca un severo deterioro en las garantías procesales constitucionales de todo justiciable.
- d. Las “lesiones” pueden provocar un daño muy superior al “daño” inicialmente provocado.
- e. La actividad jurisdiccional en estos casos excluye una evaluación a nivel de “eficiencia”, “negligencia” o “corrupción” y son elementos que viabilizan la importancia de la presente investigación.

En forma complementaria, la información en detalla se indica según los siguientes cuadros⁹⁴:



⁹⁴ PODER JUDICIAL (2017) *Estadísticas por expedientes ingresados*. Ubicado en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/as_sala_penal_permanente/estadisticas Recuperado el 21/11/2018

Estadística de Expedientes Ingresados

Seleccione el Año: 2017

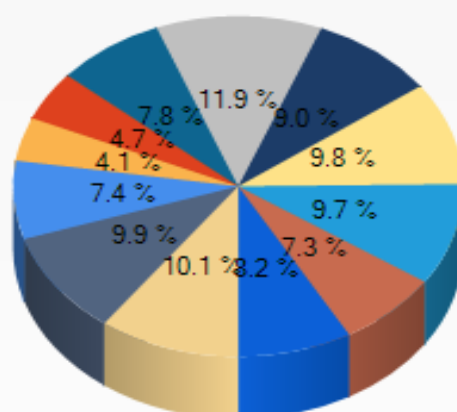
Estadística por Exp. Ingresados - 2013	
Mes	Exp. Ingresados
Enero	215
Febrero	120
Marzo	137
Abril	226
Mayo	346
Junio	260
Julio	284
Agosto	280
Septiembre	213
Octubre	237
Noviembre	294
Diciembre	286
Total:	2898

Posicion de la leyendas en el gráfico: Dentro

Mostrar gráfico en 3D ☒

Estadística por Exp. Ingresados - 2013

Enero (215 = 7.4%)	Julio (284 = 9.8%)
Febrero (120 = 4.1%)	Agosto (280 = 9.7%)
Marzo (137 = 4.7%)	Septiembre (213 = 7.3%)
Abril (226 = 7.8%)	Octubre (237 = 8.2%)
Mayo (346 = 11.9%)	Noviembre (294 = 10.1%)
Junio (260 = 9%)	Diciembre (286 = 9.9%)



- d) Tesis “La carga procesal y su influencia en el desempeño laboral del personal del III Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2017” presentado por Jorge Luis Segura Quiñones para optar

el grado académico de Maestro en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo en Trujillo⁹⁵.

En dicho informe se hace la estadística general de toda la “carga procesal” de un Juzgado de Paz, que resulta aplicable al área de estudio por las siguientes razones:

- a. Es un órgano jurisdiccional equivalente el área de trabajo identificado como “objeto de estudio”.
- b. Representa la misma problemática y contexto situacional que el observado en José Leonardo Ortiz.
- c. Representa una realidad socio judicial muy similar por ser de una Región próxima a Lambayeque.
- d. Permite el registro de la “atención de expedientes judiciales” conforme el “ingreso, el trámite y la culminación de los mismos”, el cual es equivalente al área de trabajo evaluado.

Se reproduce el esquema de trabajo de Jorge Luis Segura detallado en la página 23 de la mencionada tesis:

⁹⁵ SEGURA QUIÑONES, Jorge Luis. Tesis “La carga procesal y su influencia en el desempeño laboral del personal del III Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2017”, para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo en Trujillo Ubicado en http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11816/segura_qj.pdf?sequence=1

3.1. Evaluar la carga procesal del personal del III Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2017.

Tabla 3. 1

Flujo mensual anualizado de expedientes del III Juzgado de Paz Letrado de la CSJLL al 2017

Mes		Estado del expediente				
Mes	Ingresado	Ingresado %	En trámite	En trámite %	Culminados	Culminados %
Enero	112	9%	16	1%	96	11%
Febrero	73	6%	89	3%	0	0%
Marzo	175	14%	159	6%	105	12%
Abril	99	8%	170	6%	88	10%
Mayo	101	8%	199	7%	72	8%
Junio	105	8%	235	8%	69	8%
Julio	88	7%	236	8%	87	10%
Agosto	124	10%	289	10%	71	8%
Setiembre	111	9%	317	11%	83	9%
Octubre	107	8%	345	12%	79	9%
Noviembre	96	8%	363	13%	78	9%
Diciembre	78	6%	359	13%	82	9%
Total	1269	100%	359	100%	910	100%

Nota: Adaptado de la información brindada por la Oficina de Estadística de la CSJLL.

Esta realidad nos permite detallar:

- i. Los procesos judiciales no suelen ser trabajados de modo eficiente en el tiempo por el Poder Judicial.

ii. Los procesos judiciales no generan un análisis costo-beneficio en los denunciantes.

iii. Los procesos judiciales no permiten evaluar el “costo oportunidad” del trámite judicial frente al daño provocado.

e) Estadística particular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz durante los años 2016 y 2017.

Total Expedientes	Fecha de denuncia	Fecha de Sentencia	Fecha de Ejecución de sentencia	Costo económico propuesto en denuncia
702	2016	2016-2017 y 2018 (a)	2017 2018 (b)	En detalle (c)
	2017	2017-2018	2017 2018	

Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, sobre la base de la ejecución de una sistematización de expedientes de modo manual, para así poder detallar las fechas de “emisión de sentencias” y “fechas de ejecución de sentencias” y la evaluación de los “costos y costas” propuestos por las partes litigantes, se debe señalar, sobre las referencias a), b) y c):

a. Durante el año 2016 se han ubicado expedientes judiciales que han tomado más de dos años en evaluación: 2017 y 2018 debido principalmente a la “ejecución de la sentencia” por oposición de las partes en conflicto ante una evaluación económica.

Este factor, genera la inevitable condición de que el “costo” económico del trámite se incrementó.

- b. En las fechas de ejecución de la sentencia no se detalla si las partes han “cumplido o no” la medida judicial y esta interrogante no es posible de evaluar desde el punto de vista del juez del Juzgado de Paz Letrado por cuanto se presume que un “incumplimiento” sería denunciado.
- c. En el análisis del “costo económico” propuesto por las partes, sobre la base de 702 expedientes no es muy frecuente.

Las partes procesales no suelen tomar en referencia el tema económico en el trámite de sus expedientes judiciales.

Adicional a ello existe una mala praxis legal sobre el ingreso al proceso en el ámbito económico, porque se asume una consideración “privada” del manejo económico de un proceso judicial.

Estos elementos terminan incidiendo económicamente en la decisión de las partes procesales y los jueces no analizan este punto por ser ajeno a la evaluación judicial.

- f) Estadística particular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz durante los años 2016 y 2017:

Total Expedientes con “Lesiones” en trámite	Denuncia directa	Denuncia vía Defensoría de Oficio	Denuncia tramitada por Ministerio Público	Costo económico propuesto en denuncia
308 que es el 43.8% de la carga total del juzgado	42%	24%	34%	En detalle (c)

Como se podrá observar, esta información estadística, nos permite detallar algunos elementos importantes que constituyen un “contexto problemático” que viabiliza la ejecución de la presente tesis porque permite el análisis “particular” de un “problema general” sobre el cual se pueden hacer inferencias y deducciones.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LOS EXPEDIENTES CON EVALUACIÓN DE “LESIONES”

En el desarrollo de la presente parte, se analizarán tres elementos complementarios:

- a) Un análisis “costo beneficio” propio del Análisis Económico del Derecho sobre la base del planteamiento económico que asumen las partes en un trámite de un proceso judicial por Lesiones.
- b) El análisis económico que se desprende de la evaluación temporal de un proceso judicial⁹⁶.
- c) El análisis económico que “los justiciables” perciben de un proceso judicial⁹⁷.

Este punto se desarrolló sobre la base del desarrollo de una encuesta “libre y abierta” sobre la cual se planteaban algunas consultas sobre el Análisis Económico de una decisión de carácter judicial para analizar el “comportamiento económico” de una persona.

La encuesta se ejecutó a 100 personas, permitiéndose que se dejen anotaciones por cada pregunta o encuesta en general para así evaluar la “posición de una persona” sobre la encuesta.

⁹⁶ COSSIO DÍAZ, José Ramón (2008) *Derecho y análisis económico*. México, Fondo de Cultura Económica, p. 374

⁹⁷ KLUGER, Viviana (2006) *Análisis económico del derecho*. Buenos Aires, Heliasta, p. 302

- d) La ejecución de entrevistas a dos especialistas en Economía y Contabilidad para así analizar el contexto problemático desde una perspectiva económica.

La comprensión de elementos y razonamientos económicos respecto de su explicación por estos especialistas ha permitido construir la propuesta de la presente tesis.

Tomando en cuenta estas referencias, iniciaremos detallando algunas referencias económicas:

Por ser una investigación teórica en el ámbito jurídico, emplearemos una referencia muy directa y objetiva de los términos de economía⁹⁸ aplicables a la investigación:

Objetivos de la evaluación económica⁹⁹	Reconocer diferentes tipos de costes para evaluar beneficios o cargas negativas Evaluación de la rentabilidad económica conforme los valores en evaluación
Rentabilidad económica	Es el factor “positivo” o “negativo” que una “acción humana” genera en el tiempo y en el análisis económico
Costos Directos	Son gastos ejecutados en función a la acción dirigida y planificada por el sujeto. En este ámbito, todo proceso vinculado al trámite de “lesiones” es un costo indirecto
Costo Indirecto	Gastos asumidos por una persona que no corresponde a algo planificado o presupuestado

⁹⁸ DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNAM (2011) *Análisis económico*. México, UNAM, p. 11 y ss.

⁹⁹ RIVERA FLORES, Iván (2014) *El análisis económico*. Lima, PUCP, p. 163

Costes valorizados¹⁰⁰	<p>Actividad o servicio de una persona que no tiene vinculación con el “gasto monetario” que se ejecuta.</p> <p>En el ámbito de la investigación, está constituido por “el tiempo de trámite” que no se “mide económicamente” por las partes.</p>
Costes de oportunidad	<p>Es la evaluación que se hace por “seleccionar” una actividad “rechazando” la ejecución de otras.</p> <p>En el ámbito de la investigación, son los gastos que se generan en el ámbito judicial que pueden limitar el gasto directo de una persona frente a su familia</p>
Beneficio	Es el resultado positivo de una acción en términos económicos
Beneficio intangible	<p>Es el “valor” de resultados a nivel psicológico.</p> <p>Permite detallar en la investigación el “acceso a la justicia” en la víctima.</p> <p>En la investigación también se demuestra su alto nivel de insatisfacción de derechos y costo económico</p>
Período de evaluación	Determinado en el ámbito del estudio de la tesis al “tiempo de trámite del proceso judicial”.
Análisis coste – utilidad¹⁰¹	Permite detallar el mejor “empleo” de los recursos de una persona (tiempo, recursos económicos)
Análisis coste –	En la tesis es el empleo que ejecuta una

¹⁰⁰ AMAT, Oriol (2008) *Análisis económico financiero*. Barcelona, Gestión, p. 164

¹⁰¹ LAVADOS MONTES, Hugo (2016) *Introducción al análisis económico*. México, Cengage Learning, p. 305

efectividad	<p>persona para “acceder” a una mejor solución frente a la “lesión” provocada por el agente activo del delito.</p> <p>En este ámbito, las soluciones que eventualmente se desarrollan constituyen una “cifra negra” que no llega a ser conocida oficialmente.</p>
Tasa interna de retorno	<p>Evalúa el “gasto” en el tiempo y si fue “positivo o negativo” respecto de los recursos dispuestos y el tiempo empleado.</p> <p>En la tesis, ninguna víctima de lesiones evalúa este punto y genera un severo deterioro de sus propias condiciones económicas</p>
Lucro Cesante¹⁰²	<p>Daño patrimonial que es una pérdida de ganancia legítima en la víctima al sufrir un “daño”</p>

El orden de referencias a continuación es el análisis de las entrevistas y luego se ejecutará el análisis de los datos estadísticos de las encuestas.

Este orden permite evaluar el contexto judicial aplicable al área de estudio y por ello se detallará en orden separado los principales elementos referenciales, para luego analizar el detalle de los resultados de la encuesta.

- a) Entrevista a Mariano Larra Chucas, Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque.

Los principales elementos expositivos de esta entrevista han sido los siguientes puntos:

¹⁰² ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2018) *Responsabilidad civil*. Lima, Palestra, p. 43

- a. Los ciudadanos, en forma general, no tienen muy claro el porque es importante llevar un registro de gastos personales en la ejecución de la vida cotidiana de las actividades personales.

Esta situación probablemente sería característico de zonas de extrema pobreza, pero también se registra en sectores socio económicos con alto nivel de ingresos lo que permite detallar el *contexto de informalidad* de la economía nacional.

Así, por ejemplo, empresarios que son agroindustriales llevan una contabilidad pulcra en sus actividades empresariales, pero a nivel de su vida privada prácticamente no ejecutan un análisis de costos económicos en sus propias actividades.

- b. El manejo de costos económicos no está relacionado con el factor “rentabilidad” ni tampoco con el “costo de oportunidad”.

Esto se complementa con el punto precedente, principalmente porque hay un contexto de informalidad en el manejo económico de la actividad personal.

Esto explica que, habiendo una alta rentabilidad económica, Chiclayo y Lambayeque registran una mayor “movilidad en el transporte” a nivel terrestre que en el ámbito aéreo.

Las personas no toman en cuenta el factor “tiempo” como un elemento negativo en la evaluación de costos en la ejecución de actos personales.

- c. El factor subjetivo de la “imagen personal” ante la comunidad es un valor sumamente elevado, que no genera ninguna referencia directa con los costos económicos asumidos.

En este ámbito es posible identificar que las personas suelen ejecutar “gastos económicos” ajenos a la razonabilidad económica solo con el objetivo de garantizar algún beneficio económico.

Un factor que eventualmente se traslada al ámbito empresarial, por eso en determinados meses del año siempre se registra “gastos contables” sumamente desproporcionales a la actividad ordinaria de la empresa y que son asumidos como “gastos de imagen” porque se disponen para favorecer a personas ajenas a la empresa o a la actividad del empresario.

- d. Las personas con baja rentabilidad económica, suelen hacer mejor análisis económico sobre sus “gastos personales”.

El factor “tiempo” es un elemento negativo que incide en las economías deprimidas y por eso se opta por no participar en un proceso judicial, que genera mayores inconvenientes económicos que elementos positivos.

- b) Entrevista a Mileydi Flores Fernández, profesora del curso de Epistemología de la Ciencia Económica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

La profesora en forma muy breve, nos resumió algunas preguntas porque en esencia no quería participar de una entrevista, así que atendió las preguntas en forma verbal. Señalando los siguientes puntos:

- a. El análisis económico responde en esencia a los intereses de las personas y permite evaluar el contexto de satisfacción de necesidades.
- b. En el ámbito de las necesidades, las personas pueden valorar preferentemente unos elementos a otros y eso explica el por qué el “análisis económico” no es un elemento muy formal.

- c. Los factores que inciden en el análisis económico siempre son elementos objetivos, pero cuando se interpone el valor “justicia”, los valores cambian, más aún cuando hay una “pérdida económica” en una parte.
- d. La evaluación económica nunca ha sido materia de alguna entrevista o actividad académica en el ámbito jurídico.

La entrevistadora detalló que era la primera vez que un “abogado” le consultaba temas económicos y le sorprendía que eventualmente el manejo económico sea dirigido a una actividad judicial.

Sobre estas dos entrevistas, detallamos los resultados de la encuesta ejecutada a 100 personas que han ejecutado alguna actividad en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en Chiclayo:

Nº	PREGUNTA				SI	NO
01	Tiene o participa en algún proceso judicial en este local judicial				87	13
02	Si participa en un proceso judicial, ¿Cuenta con abogado?				82	5
03	Si cuenta con un abogado, ¿Ud. asume el pago de honorarios?				82	-
04	Conoce de la función del Abogado Defensor de Oficio				67	33
05	Porque no ha contactado a un Defensor de Oficio					
	No sabía	No podía por la especialidad	No podía por el manejo de tiempos	No conoce sobre el trámite judicial		
	23	4	15	25		
06	De contar con un abogado, podría indicar un valor económico sobre la remuneración					
	Paga una	Paga una	Paga una	Paga una		

	remuneración por acto judicial	remuneración por acto o función del abogado	remuneración por contrato	remuneración por resultados
	28	35	17	2
07	El costo de los honorarios profesionales del abogado compensa la razón por la cual está en el proceso judicial			
	Si	No	Cubre una parte significativa	Cubre una parte mínima
	1	23	8	50
08	Tiene conocimiento sobre estos elementos (de 100 encuestas, se exponen los resultados positivos)			
	Margen de rentabilidad económica	Costos y costas	Costo de oportunidad	Lucro cesante
	21	43	12	23
09	De ser posible Ud. ¿Cómo solucionaría su problema en el ámbito judicial?			
	Declarando no tener medio económico para participar en un proceso	Evitando el proceso judicial (evasión)	Negociando con la contraparte	Con un soborno
	12	69	14	38
10	El resultado del proceso judicial compensa el daño al derecho si Ud. es víctima de un delito-falta.			
	Si	Sólo una parte	El proceso genera mayor gasto económico	La víctima sufre un mayor daño
	1	10	42	47

La encuesta ha sido ejecutada con las siguientes características:

- a) De carácter anónimo para que así cualquiera pueda llenar la entrevista.
- b) Se ha permitido que el entrevistado exponga su punto de vista sobre cualquier pregunta. Las mismas que luego han sido analizadas.
- c) Los valores son referenciales para evitar la “exposición de datos personales” en el encuestado y eso permitía una mejor apreciación objetiva sobre las respuestas.

Los elementos referenciales que se han generado en la encuesta son las siguientes referencias:

- a) Muchas personas “acuden” al juzgado a averiguar el estado de un proceso, debido a diferentes factores, siendo el principal el hecho del tiempo de trabajo que impide que una parte litigante vaya directamente.
- b) Las personas que “acuden” al juzgado en colaboración con la parte procesal son usualmente familiares o la pareja.
- c) Las personas no siempre cuentan con el auxilio o apoyo legal suficiente en el desarrollo del proceso judicial.

La principal razón de este punto es el pago de honorarios profesionales que se vincula con el escaso número de casos en donde se evalúa el “pago por éxito” que es mínimo en el lugar de evaluación y permite vincular el contexto de escaso margen de empleabilidad de los Abogados Defensores de Oficio.

- d) El margen de evaluación económico es sumamente limitado más aún cuando se analiza el verdadero contexto de la “lesión”, en casos graves, donde la “reparación civil” no llega a constituir una referencia objetiva a favor de la víctima.

- e) Los resultados de los márgenes de evaluación económicos son sumamente negativos respecto de los márgenes de rentabilidad y beneficio.

Un factor que incide sobre manera en el trámite del proceso judicial porque genera:

- a. Casos de abandono procesal.
- b. Casos de asimilación de condiciones negativas en el trámite del proceso, que pueden ir desde la indefensión hasta el incremento de la victimización.
- c. Casos de abuso por temeridad procesal, en aquellos casos donde sí existe auxilio de abogado patrocinante y permite evaluar casos en los cuales la mala fe procesal es evidente¹⁰³.

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

En la búsqueda de material bibliográfico para hacer la evaluación “especial” de los elementos teóricos centrales en la investigación (Objeto de estudio), detallamos tres ámbitos de evaluación específicos: la evaluación de las tesis a nivel nacional (a), la evaluación de tesis a nivel internacional, sobre el tema en estudio (b) y la evaluación bibliográfica especial y particular sobre el Objeto de Estudio (c).

Este análisis entonces permite detallar la siguiente información:

- a) Análisis de tesis nacionales sobre los temas en estudio.

Las principales Tesis ubicadas han sido:

¹⁰³ OVEJERO PUENTE, Ana María (2012) *La presunción de inocencia y los juicios paralelos*. Madrid, La Ley, p. 279

- a. Tesis “El delito de lesiones contra la vida humana dependiente: precisiones de dogmática penal y política criminal”¹⁰⁴.

Sustentada por Juan Antonio Michue Huacache, para optar el título de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el año 2004.

La presente tesis se centra en un análisis constitucional y penal sobre la “vida dependiente” y permite evaluar algunos aspectos puntuales para la presente investigación.

Estos temas son el “daño” y el análisis “de derechos complementarios” a la integridad física de una persona.

Eventualmente en la tesis no se hace una mayor descripción del concepto “daño” en el ámbito económico y a pesar de su incidencia en la investigación, este punto no ha sido abordado por el tesista.

- b. Tesis “Interpretación constitucional de los delitos de lesiones con especial referencia al tráfico vial y al artículo 124 del Código Penal”.¹⁰⁵

Sustentada para optar el Grado de Magister en Investigación Jurídica en la Pontificia Universidad Católica del Perú por Roger Yon Ruesta en el año 2016.

¹⁰⁴ MICHUE HUACACHE, Juan Antonio. Tesis “El delito de lesiones contra la vida huana dependiente: precisiones de dogmática penal y política criminal”, para optar el título de Abogado en la UNMSM. Ubicado en http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2892/Michue_hj.pdf?sequence=1 Recuperado el 20/03/2018

¹⁰⁵ YON RUESTA, Roger (2016) Tesis “Interpretación constitucional de los delitos imprudentes: con especial referencial al tráfico vial y al vínculo 124 del Código Penal”. Ubicado en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U2tBr0mfWgEJ:tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7904/YON_RUESTA_ROGER_INT_ERPRETACION_CONSTITUCIONAL.pdf%3Fsequence%3D1+%&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=pe Ubicado el 17/05/2018

El análisis de la presente tesis, desarrollada por un profesor de la misma casa de estudios, permite:

- i. Plantear el detalle de los elementos constitucionales que guían el proceso penal.
 - ii. Comprender la articulación interdisciplinaria que existe en la evaluación punitiva de un “delito”, en particular en la definición de “políticas penales”.
 - iii. Analizar la poca incidencia doctrinaria sobre los “delitos de imprudencia”, limitándolos a elementos punitivos de baja referencia normativa que genera un problema en el ámbito procesal y jurisdiccional penal.
 - iv. Permite la evaluación de estadística referencial sobre el modo de evaluar en el Poder Judicial de modo crítico, sobre la cual se detalla que no hay referencias objetivas al modo en el cual se fija el contexto económico que precede a la determinación de la “reparación al daño provocado” en la víctima.
 - v. Permite detallar la nula referencia al modo en el cual se ejecuta el “cobro” de la “reparación civil” a favor de la víctima, el cual es un detalle que involucra que la sentencia no ha sido sometida a ejecución en forma objetiva porque no existe referencia sobre el cumplimiento del mismo.
- c. Tesis “Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre lesiones leves, en el Expediente N° 00442-2012-O-2501-JR-PE-04 del Distrito Judicial del Santa, Chimbote, 2016”¹⁰⁶.

¹⁰⁶ GARCÍA LUCERO, Dennis (2016) *Tesis "Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre lesiones leves, en el Expediente N° 00442-2012-O-2501-JR-PE-04 del Distrito Judicial del Santa, Chimbote, 2016"*, Tesis para optar el título de abogado en la Universidad ULADECH. Ubicado en http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1265/CALIDAD_G

Presentada por Dennis García Lucero para optar el título de abogado en la Universidad Católica de Los Ángeles Chimbote, en el 2016.

El estudio de tesis, permite el análisis temático de los siguientes puntos:

- i. El estudio del derecho procesal y probatorio que detalla el nivel de evaluación de las lesiones en un proceso penal.
- ii. El estudio casuístico de un “expediente judicial”, sobre el cual el método de evaluación ha sido negligente y además ajeno a lo determinado por la doctrina.
- iii. El análisis de métodos de evaluación basados en la interpretación de principios de orden procesal y constitucional.
- iv. El análisis de la “prueba” en el delito de lesiones, el cual permite una participación activa de la parte afectada por los daños provocados.
- v. El estudio de la antijuricidad aplicable al análisis del delito de lesiones.
- vi. El estudio de la “sentencia” tanto en el ámbito argumentativo como a nivel de la descripción del esquema normativo a seguir, impuestos por el Código Penal y Código Procesal Penal.

- d. Tesis “Monto de la reparación civil por delito de lesiones y nivel de satisfacción de los intereses de las víctimas. (Estudio aplicado en el Juzgado Penal Unipersonal de Canchis, Sicuani en el año 2014)”¹⁰⁷.

Sustentada por los Bachilleres Analí Mirian Corahua Romero y Liliana Ruby Romero Quispe para optar el título de Abogado en la Universidad Andina del Cusco en el 2015.

- i. El presente estudio es de suma importancia porque se hace el análisis de un “órgano jurisdiccional en especial”, de la misma manera en la que se ha sustentado la presente Tesis.
- ii. El estudio casuístico permite el análisis de una estadística sumamente importante y que permite el nivel de “atención” a las víctimas del delito de lesiones.
- iii. El estudio de casos permite la comprensión de la verdadera dimensión del “daño” en las víctimas de lesiones que usualmente no es apreciado en el ámbito jurisdiccional.
- iv. El contexto de la reparación civil es sumamente criticado en la tesis, debido al escaso margen de atención a la “reparación” que se determina a favor de la víctima.

Dicho factor es negativo principalmente por el elevado costo o daño en la víctima y el escaso margen de “rentabilidad” económico de la reparación civil otorgado a favor de la víctima.

¹⁰⁷ CORAHUA ROMERO, Analí Mirian y ROMERO QUISPE, Liliana Ruby (2015) *Tesis “Monto de la reparación civil por delito de lesiones y nivel de satisfacción de los intereses de las víctimas. (Estudio aplicado en el Juzgado Penal Unipersonal de Canchis, Sicuani en el año 2014)”* para optar el título de abogado en la Universidad Andina del Cusco. Ubicado en http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/360/3/Anali_Liliana_Tesis_bachiller_2016.pdf Recuperado el 25/07/2018

- v. Se detalla el nivel de importancia del conocimiento de elementos teóricos del derecho civil para poder ejecutar un proceso judicial penal.
- e. Tesis “La prueba pericial en la acreditación del delito de lesiones psicológicas”¹⁰⁸.

Presentada por Meylin Noelia Sánchez Oliveros y Claudia Aracelly Velásquez Ledesma en la Universidad Nacional de Trujillo para optar el título de abogadas en el año 2017.

La presente tesis permite detallar:

- i. La importancia de la prueba pericial en el trámite de un expediente judicial que detalla el delito de lesiones.
- ii. El análisis específico de un “delito” particular vinculado a la evaluación de la Ley N° 30364 que está relacionada con el caso de violencia familiar.
- iii. El análisis de la evaluación pericial, tanto en su ámbito probatorio como procedimental.
- iv. El estudio de la incidencia del “daño” en el ámbito psicológico.

Este punto es sumamente importante, porque permite detallar la incidencia de un “mayor daño” al sufrido por la víctima y está vinculado al desarrollo de su propio ámbito personal en el trámite del proceso.

¹⁰⁸ SÁNCHEZ OLIVEROS, Maylin Noelia y VELÁSQUEZ LEDESMA, Claudia Aracelly (2017) *Tesis “La prueba pericial en la acreditación del delito de lesiones psicológicas”*, para optar el título de abogadas en la Universidad Nacional de Trujillo. Ubicado en <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/9888> Recuperado el 03/04/2018

- b) Análisis de tesis en el extranjero sobre los temas en estudio.

Las principales Tesis ubicadas han sido:

- a. Tesis “Política de prevención contra el delito de lesiones”¹⁰⁹.

Sustentada por Vicente Ramiro Orellana Cueva para optar el título de abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, en el año 2012.

Los elementos más importantes de esta Tesis, son los siguientes:

- i. Se hace un detalle muy específico del nivel de “impunidad” en el delito de lesiones, principalmente al elevado costo económico que limita a la víctima en la tutela de sus derechos.
- ii. Se hace un estudio comparativo a nivel de América Latina sobre el tratamiento penal del delito de lesiones y se llega a una referencia parcial: la legislación no garantiza la tutela del derecho afectado.
- iii. Se detalla las falencias y nivel de poca efectividad de las legislaciones penales en América Latina, respecto del tratamiento de los casos de “lesiones” en el ámbito jurisdiccional penal.

En esta investigación tampoco se hace una evaluación económica de los márgenes de acción de la víctima y es una referencia importante, por cuanto se hace el análisis de la impunidad en estos delitos.

¹⁰⁹ ORELLANA CUEVA, Vicente Ramiro (2012) *Tesis "Política de prevención contra el delito de lesiones"*, para sustentar el título de Abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Ubicado en <http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3530/1/tesis%20definitiva.pdf>
Recuperado el 20/10/2018

- b. Tesis “Análisis comparativo del tipo básico del delito de lesiones en España y en Chile”¹¹⁰.

Sustentada por Mauricio Alfredo Retting Espinoza para optar el grado de Doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona, en España en el año 2010.

Los principales elementos teóricos que detalla la tesis son:

- a. Se hace un estudio comparado entre las legislaciones de España y Chile y se observa una “relación muy directa” a nivel doctrinario y legislativo.
 - b. Se hace un estudio detallado de los elementos del “tipo penal del delito de lesiones”.
 - c. Se hace el estudio del resultado “típico” en el delito de lesiones.
 - d. Se hace un análisis de los comportamientos del “agente activo del delito”, los cuales son incidentales en la evaluación del “daño” provocado (lesiones)
- c) Análisis de la doctrina nacional o material bibliográfico sobre los elementos temáticos de la Tesis¹¹¹.

Los principales investigadores que han analizado el “Delito de Lesiones” en la doctrina nacional y sus obras vinculadas a la investigación de la Tesis, son:

¹¹⁰ RETTING ESPINOZA, Mauricio Alfredo (2010) *Tesis “Análisis comparativo del tipo básico del delito de lesiones en España y Chile”*, para optar el grado de Doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona, España. Ubicado en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41562/1/RETTIG_TESIS.pdf Recuperado el 01/05/2018

¹¹¹ En este punto hemos observado que editoriales como Gaceta Jurídica han publicado libros sobre los puntos temáticos de la presente tesis pero los autores no son peruanos. Se expone este detalle por especificación.

a. Yván Montoya¹¹².

Analiza el documento más antiguo sobre “lesiones” en la doctrina ubicada como la más “referencial” en términos contemporáneos.

El texto desarrolla el contexto de la “responsabilidad penal” de quien ejecuta “daño de lesiones” en forma culposa.

b. Juan Hidalgo Portocarrero¹¹³.

Desarrolla en su libro “Delito de lesiones” una evaluación y diferenciación entre “delito” y “falta”.

Analiza el contexto dogmático que sustenta la razonabilidad de las “faltas” en el ámbito penal a nivel nacional por parte de la legislación penal.

Detalla el estudio de los “tipos especiales” en la legislación penal.

c. Ramiro Salinas Siccha¹¹⁴.

En el libro “Delito de Lesiones”, se detalla la casuística aplicable al ámbito, pero no hay una referencia teórica sobre cada elemento del “tipo penal”.

Tampoco se observa una evaluación económica del “delito” y nos permite evaluar el contexto aplicativo de la casuística en el contexto de la “exposición de argumentos” de las partes procesales.

¹¹² MONTOYA, Yván. “La responsabilidad penal del médico en las esterilizaciones quirúrgicas involuntarias”. P. 244 a 253. En: Taller de Derecho. Año 1, Nº 1, enero 2002.

¹¹³ PORTOCARRERO HIDALGO, Juan (2003) *Delito de Lesiones*. Lima, Portocarrero.

¹¹⁴ SALINAS SICCHA, Ramiro (2005) *Delito de lesiones*. Lima, Gaceta Jurídica.

El análisis casuístico si bien era referencial para el año de publicación, corresponde detallar que no es vinculante para el período de evaluación de la tesis.

d. Manuel Cancio Meliá¹¹⁵.

Ejecuta el primer análisis bibliográfico de un caso de “lesiones” generado en el ámbito internacional: el caso Contergan.

Este estudio permite el análisis de la evaluación de los medios probatorios para analizar el delito de “lesiones” en forma objetiva en un proceso penal.

Es el autor con mayores referencias al “elemento dogmático del delito de lesiones”.

e. Claus Roxin¹¹⁶.

En el libro “La imputación objetiva en el derecho penal” se detallan los elementos conceptuales en el ámbito dogmático penal que son referencia común en los autores citados en la presente tesis.

El estudio directo de conceptos teóricos referenciales ha permitido el análisis de la “definición” que ejecuta el legislador al momento de calificar un “tipo penal”.

Corresponde detallar que todos los autores citados hacen mención al presente texto.

f. Susana Escobar Vélez¹¹⁷.

¹¹⁵ CANCIO MELIÁ, Manuel. “El caso Contergan: cuarenta años después”. P. 399 a 405. En: Foro Jurídico. Año 10, Nº 12, octubre 2011.

¹¹⁶ ROXIN, Claus (2012) *La imputación objetiva en el derecho penal*. Lima Grijley.

Desarrolla el libro “La responsabilidad penal por productos defectuosos” que pueden provocar “lesiones” en los consumidores.

Hace el análisis económico del derecho aplicable al ámbito comercial y administrativo en el ámbito del “Derecho del Consumidor”.

Permite evaluar el aspecto económico de modo directo, pero sobre la incidencia a ámbitos ajenos al Derecho Penal.

g. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez¹¹⁸.

Compila varios trabajos académicos de varios autores, sobre todo europeos, y permite:

- i. Analizar la comprensión teórica en lo penal del delito de lesiones.
- ii. Analizar la problemática criminológica del delito de lesiones.
- iii. Detallar la incidencia del aspecto económico del daño como “delito”.
- iv. Evaluar la incidencia del manejo de la reparación civil a favor de la víctima.

4. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO

Sobre la base de lo expuesto en los puntos precedentes, detallamos el “aporte teórico” de la presente tesis en el último capítulo de la Segunda Parte y en la parte de “Recomendaciones de la Tesis”.

¹¹⁷ ESCOBAR VÉLEZ, Susana (2012) *La responsabilidad penal por productos defectuosos*. Valencia, Tirant Lo Blanch.

¹¹⁸ SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo (2014) *Los delitos de peligro: propuestas para su legítima aplicación*. Lima, Gaceta Jurídica.

Se hace esta referencia a efectos de cumplir con el esquema de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y no reiterar elementos teóricos sin un orden referencial en lo metodológico.

A modo de resumen, planteamos el siguiente esquema:

PROCESO PENAL: LESIONES			
Denuncia	Ejercicio de la acción penal	Ejercicio de la valoración del daño de forma autónoma	Ejercicio de la valoración económica de la reparación civil
Acción de la parte acusada	Ejecución de la defensa ante la imputación	Planteamiento de una Reparación Civil	Acuerdo con el Ministerio Público (de ser el caso)
Trámite judicial administrativo	Notificación	Ejecución de una Pericia	Programación de una audiencia única
Audiencia	Evaluación de los derechos y posiciones procesales	Evaluación de la pericia	Determinación de la reparación civil y condena al imputado (de ser el caso)
Ejecución de la sentencia	Obligación de comunicar la incidencia de la ejecución de la sentencia por las dos partes procesales		

CUARTA PARTE

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

El proceso de “contrastación de hipótesis”, es el procedimiento por el cual se “verifica” la hipótesis formulada en el Proyecto de Tesis, el cual ha sido el mecanismo por medio del cual se autoriza la ejecución de la presente investigación.

En la fundamentación de la hipótesis, superamos los mecanismos de “observación” que se podían establecer sobre el “contexto problemático” y sobre las mismas fundamentamos nuestra “posición científica” frente al “problema en evaluación”.

Como resultado de este proceso, detallamos en el último capítulo de la Segunda Parte, nuestra “hipótesis”, la cual surge de un proceso de “fundamentación de nuestra posición teórica”, la cual es contraria a la situación procesal y judicial que se detalla en el ámbito del juzgamiento de procesos penales vinculados al tratamiento de las “lesiones” en un Juzgado de Paz Letrado en Chiclayo.

Por ello, tomamos como elementos referenciales o “variables” los siguientes elementos:

- a) La realidad judicial en el ámbito de la “carga procesal” que se trabaja en el Juzgado de Paz Letrado de Leonardo Ortiz, en Chiclayo, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, respecto de los casos vinculados al tratamiento de “lesiones”.
- b) El tiempo de trámite entre la “denuncia” (Elemento Temporal N° 01), la expedición de la “Sentencia” (Elemento Temporal N° 02), la cual puede ser “condenatoria” (Elemento de Resultado A) o “absolutoria” (Elemento de

Resultado B) y la fecha de “cumplimiento de la sentencia” por parte del condenado en la sentencia (Elemento Temporal N° 03)

Obsérvese que estos tres elementos denominados “Elementos Temporales” inciden en el “tiempo” que genera la referencia con el siguiente elemento de estudio:

- c) El costo económico que implica el desarrollo del “proceso judicial”, sin vincularlo directamente con el “resultado” del mismo”, que denominamos “Elementos de Resultado A o B”.

Por “costos económicos”, tomamos como referencias, la disposición de:

- a. Una contraprestación económica por pago de honorarios a un abogado.
- b. Pago de “costas y costos”, excluyendo los honorarios del abogado.
- c. El costo de oportunidad en la atención del proceso judicial que incluye la disposición de tiempo del denunciante.
- d. El Lucro Cesante del denunciante.
- e. Los costos económicos provenientes del daño a la familia generado.

Como resultado de esta posición, validamos nuestra “contrastación de la hipótesis”, toda vez que fundamentamos nuestra posición en base a los elementos teóricos evaluados en el Marco Teórico.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Detallamos que la investigación se ha ejecutado en el Segundo Juzgado de Paz Letrado del Distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de los cuales se han ubicado 200 expedientes entre los

años 2016 al 2017, principalmente debido al hecho de cumplir las tres etapas de evaluación: “Elemento Temporal” números 01, 02 y 03.

De esta referencia, tenemos la “población” que han sido los expedientes penales vinculados al tratamiento de “lesiones”. En este sentido, esta “población de estudio”, nos permitirá detallar la relación “expedientes judiciales por especialidad” y por ello se hace esta mención para poder evaluar la incidencia de la “carga procesal de la muestra de estudio”.

El porcentaje de análisis que nos ha permitido evaluar estadísticamente nuestra investigación es la “muestra de estudio”, los cuales sólo son los casos de “lesiones” y de donde se han extraído como referencias:

- a) Los Elementos Temporales.
- b) Los Elementos de Resultado.
- c) Las Costas y Costos.
- d) El Lucro Cesante, cuando el denunciante detalla dicha referencia en el expediente judicial.

3. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

Las variables que se han empleado son las siguientes:

- **Variable Independiente:** La evaluación de la Ley Penal que desarrolla el “proceso penal de las faltas por lesiones”.

Se debe detallar que por “ley penal” incluimos la regulación apropiada que “determina el procedimiento” seguido en los procesos sobre lesiones, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, incluyéndose al Código Procesal Civil por cuanto la determinación de “costas y costos” proviene de esta norma empleada supletoriamente.

- **Variable Dependiente:** Se han evaluado sólo expedientes judiciales seguidos en el Segundo Juzgado de Paz Letrado del distrito de José Leonardo Ortiz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, durante los años 2016 y 2017.

Se ha determinado este “período de tiempo en estudio” para así hacer una evaluación sumamente precisa en cuanto a la necesidad de una reforma en el tratamiento jurisdiccional de las faltas por “lesiones”.

- **Operacionalización de variables**

DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERATIVA	INDICADORES	SUB-INDICADORES
casos de lesiones	Afectación a la integridad de una persona y sobre la base de la evaluación pericial se determinará el nivel del daño provocado	Faltas por lesiones dolosas Faltas por lesiones culposas Casos de violencia familiar Casos de denuncias de agresión y lesiones en el ámbito penal	Denuncias sobre la comisión de faltas por lesiones en el ámbito de la PNP del Distrito de José Leonardo Ortiz Denuncias sobre la comisión de faltas por lesiones ante el MP del Distrito de José Leonardo Ortiz
La atención jurisdiccional en el tiempo en el caso de lesiones en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Leonardo Ortiz en el Distrito Judicial de Lambayeque	La evaluación de “cuanto” demora el proceso judicial de casos de lesiones frente a la “gravedad” de las lesiones que la víctima registra	Faltas por lesiones dolosas Faltas por lesiones culposas Casos de violencia familiar Casos de denuncias de agresión y lesiones en el ámbito penal	Denuncias sobre la comisión de faltas por lesiones en el ámbito de la PNP del Distrito de José Leonardo Ortiz Denuncias sobre la comisión de faltas por lesiones ante el MP del Distrito de José Leonardo Ortiz

4. LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN.

Se ha ejecutado la investigación, siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

Región	Lambayeque
Institución	Poder Judicial
Dependencia institucional	Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Órgano jurisdiccional evaluado	Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz en Chiclayo, Lambayeque

Se especifica que la “identificación” del órgano jurisdiccional evaluado está en función al hecho de que la investigadora trabaja en dicha entidad y ubicación, razón por la cual el acceso a las estadísticas oficiales y al conocimiento de los hechos permite una evaluación objetiva sobre el “contexto problemático” evaluado.

5. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se detalla el siguiente esquema, que permite el detalle de cada referencia:

Material	Técnica empleada	Instrumentos
Libros en las especialidades de trabajo del Marco Teórico	Lectura de textos	Análisis y Observación
Revistas Jurídicas en las especialidades del Marco Teórico	Uso de fichas bibliográficas	Desarrollo de diagramas
Material bibliográfico de respaldo para evaluar	Uso de sistematización de información	Desarrollo de esquemas de trabajo

el contexto social y jurisdiccional en Lambayeque y el Poder Judicial	estadística	
Folletos informativos del Poder Judicial y de naturaleza jurídica	Encuestas	Desarrollo de cuadros estadísticos
	Entrevistas	

6. METODOLOGÍA EMPLEADA

Se han empleado los siguientes métodos de trabajo:

El Método de análisis Universal, para así poder ejecutar una investigación de carácter científico.

El Método analítico, principalmente para analizar el Marco Teórico.

El Método Inductivo y Deductivo, para exponer los argumentos en el desarrollo de la propia investigación que se sustenta en la Segunda Parte.

El Método de Análisis Económico de Derecho que permite la evaluación de “costos” y “temas económicos” en el manejo de una decisión judicial y que permite la ejecución de un expediente judicial por parte de un justiciable.

El Método argumentativo, para así poder desarrollar el último capítulo de la Segunda Parte, así como el sustento de la Tercera Parte, en la cual se hace la “discusión” académica sobre los elementos teóricos evaluados.

El Método estadístico, para así poder evaluar los elementos jurisdiccionales evaluados, principalmente para evaluar la “población y muestra de estudio”.

El Método exegético para así poder evaluar la “viabilidad económica” en el desarrollo de nuestra propuesta.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

a. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Etapas	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
Búsqueda información												
Elaboración marco teórico												
Formulación del Borrador y Cuadros de trabajo												
Elaboración de las estadísticas												
Análisis de las estadísticas con especialistas entrevistados												
Validación de la hipótesis												
Ejecución de encuestas de trabajo												
Coordinación con el asesor de la Tesis para la aprobación el documento a presentar a la UNPRG												
Presentación de la tesis												
Sustentación												

b. PRESUPUESTO

RUBRO	CANT.	DETALLE	TOTAL
Bienes y materiales			
Libros			400
Revistas			200
Servicios			
Impresiones		Copias	100
Empastados, anillados			
Uso internet			100
Gastos varios			100
Período de investigación			
Alimentación			100
Movilidad			100
Imprevistos			100
Total en soles			1200

c. FINANCIAMIENTO

Los gastos que demande la ejecución del presente trabajo de investigación serán cubiertos por recursos propios del investigador.

CONCLUSIONES

Producto del resultado de la investigación, que se sostiene en el desarrollo de la Segunda Parte y de la Tercera Parte, en la cual se hace el análisis del Marco Teórico que explica el “contexto problemático” y de donde sale el “problema de la investigación, sobre la base del desarrollo de los “objetivos”, la “justificación” y la “hipótesis”, que permite el análisis de las “variables”, planteamos las siguientes conclusiones.

1. El Estado peruano no ha tomado en cuenta una correcta política pública en el ámbito de la implementación del servicio público de administrar e impartir justicia.

En el ámbito de la “administración” las deficiencias parte de la propia concepción del “proceso judicial” a un contexto exegético y decimonónico que hace disfuncional el análisis de un expediente judicial en el tiempo y en el ámbito económico.

En el ámbito de la “impartición” de justicia, las víctimas de una falta - delito, en el presente caso de “lesiones”, ven incrementar los “daños” que padecen y esto a consecuencia de un mal servicio de justicia que demora en el tiempo la atención de un derecho fundamental: la tutela de la integridad de la persona.

2. La empleabilidad de los principios procesales constitucionales se deteriora cuando la legislación sustantiva y procesal genera una equivocada percepción en el manejo del “daño” en una falta–delito, toda vez que genera una victimización secundaria o estructural, ampliando el margen negativo del daño.
3. La tutela de derechos debe estar vinculado a dos parámetros de evaluación en todo tipo de proceso penal:

- a) La disponibilidad de la atención del servicio de justicia en el tiempo, para que este servicio será oportuno, optimo, eficaz y eficiente.
 - b) La opción al mejoramiento de condiciones de evaluación económica en un “daño” para que así la víctima pueda acceder a una mejor defensa o tutela de derechos ante una situación criminal.
4. La evaluación del razonamiento económico, sobre la base de la disponibilidad de derechos (a), la empleabilidad de elementos económicos (b) y la razonabilidad de la atención del daño por parte del agente activo (c) podría mejorar el servicio de impartición de justicia para que este sólo pueda atender situaciones graves.

En este punto sostenemos que las faltas por lesiones pueden ser derivados a un sistema jurisdiccional especial:

- a) O “nuevo”, sobre la base de la disposición de un nuevo procedimiento (conforme el desarrollo de la presente tesis)
 - b) O al sistema jurisdiccional civil, para que así el tratamiento de las lesiones que puedan ser de menor incidencia puedan ser atendidos de modo directo, limitando el incremento de sobre costos económicos, que eventualmente inciden en el Poder Judicial con una sobre carga procesal que puede ser atendido de modo eficiente en otra vía jurisdiccional.
5. Los delitos vinculados a “la imprudencia” en el ámbito del proceso judicial estipulado como tal, genera un inconveniente: la evaluación probatoria, que eleva la temporalidad en la atención de estos casos, provocando un detrimento en los derechos de la víctima.
6. Los casos relacionados a “imprudencia en el ámbito vial”, que son la generalidad de los casos analizados en el ámbito jurisdiccional en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz nos permite

detallar que en la mayoría de situaciones se puede registrar una sentencia judicial, pero esta no soluciona el “daño” provocado, el cual en algunas situaciones provoca minusvalía en la víctima y las reparaciones civiles no constituyen ningún elemento reparatorio.

7. El sistema jurisdiccional en su totalidad no logra comprender el factor “temporalidad” y “costos económicos” en el ámbito del tratamiento de un expediente judicial, con lo cual el daño a las personas que intervienen en un proceso judicial puede resultar:

- a) Oneroso, porque involucra un gasto elevado de recursos.
- b) Atemporal, porque a pesar del registro de una sentencia, la ejecución de la misma implica un período de tiempo ampliatorio.
- c) Disfuncional, porque el “daño” no logra ser reparado en su totalidad.
- d) Ineficaz, porque al final las partes optan por solucionar un eventual conflicto fuera de los márgenes de la ley (corrupción o compra de silencio en el ámbito de una denuncia)

8. La posibilidad de replicar los alcances de una evaluación económica puede ser extendidos a todo tipo de procesos, principalmente en el ámbito de aquellas situaciones en las cuales la “reparación civil” puede ser acordada entre la víctima y el agente activo, previa aprobación del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Sin embargo, esta opción consideramos que no es favorable en el actual contexto porque implica una comprensión de factores exógenos al ámbito judicial: el manejo de recursos vitales: tiempo y patrimonio, en el ámbito de la atención de problemas de naturaleza penal.

9. El análisis de las penalidades en la fundamentación de las sentencias penales no logra ser vinculante con un razonamiento basado en el análisis

económico y por ello las “reparaciones civiles” son sumamente exiguas, generando un “mayor daño” a la víctima, quien no puede atender sus necesidades básicas provocadas por el “daño”, como por ejemplo atenuar el “lucro cesante” provocado por las lesiones que generan faltas.

RECOMENDACIONES

Conforme al desarrollo de la presente tesis, se propone el siguiente esquema de “propuestas” como recomendaciones:

1. Generar un *procedimiento especial y único* para atender casos de “lesiones”, que incluya:

- a) La evaluación de las faltas vinculadas a la afectación parcial o leve de atentados contra la integridad de una persona (en un sentido amplio).
- b) La generación de un procedimiento que limite la ejecución de un proceso judicial complementario, usualmente en la vía jurisdiccional civil sobre “reparación de daños: Responsabilidad Civil”.

Dicha opción podría *limitar* el ejercicio de actividades onerosas a la víctima, haciendo mucho más eficiente el servicio de administración de justicia.

- c) La posibilidad de *privatizar un aspecto del proceso penal*, el cual en la actualidad se expone como el “Acuerdo Reparatorio” que permite que la víctima pueda acceder a una mejor acción en la tutela de sus derechos afectados por el agente activo de la falta.

Eventualmente esta opción permite la optimización de recursos en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial para así atender casos o expedientes judiciales con mucha más relevancia socio criminológica y penal.

- d) La generación de un procedimiento establecido en cuatro etapas específicas:

- a. Etapa de denuncia, la cual deberá contener una valoración económica del “daño” por parte de la víctima sobre la base de elementos objetivos.

Este punto permitirá que las “víctimas” no generen planteamientos exagerados o irracionales, como el planteamiento de una indemnización “millonaria”.

Como límite se podría considerar el hecho que podría generar un inconveniente en la víctima, que deberá demostrar una “valoración económica objetiva” al juzgado, pero esta situación se remedia si se toma en cuenta el sometimiento a la pericia judicial por parte de la víctima.

- b. Etapa de contradicción, formulada por la parte “acusada”.

En dicha etapa, el sujeto acusado de cometer una falta - delito puede formular una “propuesta de reparación civil” a favor de la víctima y puede provocar una “Terminación Anticipada del Proceso”.

Esta opción permitiría la atención inmediata en el tiempo del “daño”, tanto a nivel de “reparación” como a nivel de “evaluación de la infracción penal” por parte de las instituciones jurisdiccionales, optimizándose recursos en el Estado y mejorando la atención del “daño” a la víctima.

- c. Etapa de evaluación y manejo de pericias.

En esta etapa, ejecutada por disposición judicial en la admisión a trámite del proceso se ejecuta la pericia que determina:

- i. El daño provocado.
- ii. El hecho típico y sus condiciones.

iii. Las partes de la falta- delito.

iv. La evaluación económica del “daño”.

v. La peligrosidad del sujeto activo del delito para evaluar la opción de la “Terminación Anticipada del Proceso”.

d. Etapa de juzgamiento y emisión de sentencia.

Evaluados los tres puntos precedentes, el juez puede en audiencia desarrollar la “etapa oral” del proceso y emitir una sentencia, sobre la base de los elementos básicos del expediente judicial.

La implementación de este procedimiento nos permite sostener:

- a) No se genera un gasto económico en el Estado con la generación de un nuevo “tipo de proceso”, mucho más eficiente, tomando en cuenta que la mayoría de Juzgados de Paz Letrados del país disponen de una sobre carga procesal en esta especialidad.
- b) Permite una mejora en el trámite de un expediente judicial optimizando recursos temporales y patrimoniales en los ciudadanos involucrados y mejorando la eficiencia del sistema judicial.
- c) Permite la reducción de plazos procesales en forma objetiva, sin afectar los principios procesales y constitucionales aplicables al desarrollo de un expediente judicial.
- d) Permite *mejorar* el sistema jurisdiccional en su conjunto, introduciendo elementos de evaluación ajenos a la especialidad legal, como:
 - a. El análisis del “tiempo”.

- b. El análisis del “costo patrimonial de una acción de incidencia legal”.
 - c. El análisis del “beneficio”, “optimización de recursos” y el “resultado financiero o económico”.
2. Permite validar la generación de un *traslado de jurisdicción* a la jurisdicción civil el trámite de casos de las faltas por *lesiones de menor incidencia en la integridad personal de una víctima*, cuando en esencia la determinación del daño podría ser mejor viabilizado en el ámbito civil, respecto de la reparación civil.

Este ámbito lo limitamos al contexto de los *delitos imprudentes*, por cuanto no hay una acción dolosa que pudiere ser calificada como un “delito”.

Ello permitiría una mejor atención jurisdiccional a un caso específico y podría mejorar la optimización de los tiempos en evaluación del expediente judicial, sobre la base de la búsqueda de una mejor *fórmula preparatoria en lo económica a favor de la víctima que pasaría a ser demandante*.

BIBLIOGRAFÍA

1. ACOSTA ORTÍZ, Rubén Darío (2013) *Derecho procesal garantista y constitucional: el derecho constitucional y los derechos fundamentales de la teoría garantista del derecho procesal*. Bogotá, CESJUL
2. AFFERNI, Giorgio. “La reparación del daño no patrimonial en la responsabilidad objetiva”. En: *Ius Et Veritas*. Año 13, Nº 29, 2004
3. ALFARO VALVERDE, Luis (2011) *La indemnización en la separación de hecho: análisis del formante jurisprudencial y doctrinal*. Lima, Gaceta Jurídica
4. AMAT, Oriol (2008) *Análisis económico financiero*. Barcelona, Gestión
5. ÁNGEL YAGUEZ, Ricardo (1995) *Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño)* Madrid, Civitas
6. ARIAS SCHEREIBER BARBA, FELIZ (2014) *Balance y perspectivas de la aplicación del análisis costo-beneficio ACB en los proyectos de ley del Congreso de la República del Perú*. Lima, Equis Equis
7. ARMENTA DEU, Teresa. “Algunas reflexiones en torno a la convergencia entre los procesos civil y penal y la deriva común hacia métodos extrajudiciales”. En: CACHÓN CADENAS, Manuel (2013) *La convergencia entre proceso civil y penal: ¿una dirección adecuada?* Madrid, Marcial Pons.
8. BAZALAR PAZ, Víctor (2018) *El proceso inmediato: flagrancia, confesión sincera y prisión preventiva*. Lima, Gaceta Jurídica.
9. BAZALAR PAZ, Víctor (2018) *El proceso inmediato*. Lima, Gaceta Jurídica
10. BOBBIO, Norberto (1992) *Thomas Hobbes*. México, Fondo de Cultura Económica
11. BORJA JIMÉNEZ, Emiliano (2003) *Curso de política criminal*. Valencia, Tirant Lo Blanch
12. BOUCKAERT, G. (1995) *Citizens and consumers: and NPM dilemma*. En: *Public Management Review*. Vol. 7, Nº 2.
13. BRAVO BASALDÚA, Roque (2012) *Tesis “Propuesta para mejorar la eficacia del proceso de faltas en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte”, para optar el grado de Magister en Política Jurisdiccional en la PUCP*.

14. BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “temas de responsabilidad civil en debate: nuevas tendencias”. En: *Ius Et Veritas*, Vo. 22, N° 45, 2012
15. BUNGE CAMPOS, Luis María (2004) *Las garantías penales y procesales: enfoque histórico comparado*. Buenos Aires, Editores del Puerto
16. CACHÓN CADENAS, Manuel (2013) *La convergencia entre proceso civil y penal. ¿Una dirección adecuada?* Madrid, Marcial Pons.
17. CALISAYA MÁRQUEZ, Ángel (2016) *La indemnización por inestabilidad económica tras la separación de hecho: criterios para la identificación del cónyuge más perjudicado. Tesis para optar el grado de magister en la PUCP*.
18. CANCIO MELIÁ, Manuel. “El caso Contergan: cuarenta años después”. En: *Foro Jurídico*. Año 10, N° 12, octubre 2011.
19. CARO CORIA, Dino Carlos (2004) “Principio de Lesividad de Bienes Jurídicos Penales”, en *Código Penal Comentado*, T. I, 1° ed., Gaceta Jurídica, Lima.
20. CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994) *La tutela judicial efectiva: derechos y garantías procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución*. Madrid, Bosch
21. CHAQUÉS BONAFONT, Laura (2006) *Redes de políticas públicas*. Madrid, Centro de Investigaciones sociológicas.
22. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1995) *Sistema judicial y derechos humanos*. Lima, CAJ
23. CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Proyectos de Ley, evaluación por Proponente*. Ubicado en www.congreso.gob.pe, recuperado el 20/10/2018
24. CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL (2008) *Nuevos criterios para la determinación judicial de la pena*. Lima, Poder Judicial
25. CONTINI DE GONZÁLES, Norma (1997) *Investigación en evaluación psicológica e interdisciplinaria*. Buenos Aires, Psicología Clínica
26. CORAHUA ROMERO, Analí Mirian y ROMERO QUISPE, Liliana Ruby (2015) *Tesis “Monto de la reparación civil por delito de lesiones y nivel de satisfacción de los intereses de las víctimas. (Estudio aplicado en el Juzgado Penal Unipersonal de Canchis, Sicuani en el año 2014)”* para optar el título de abogado en la Universidad Andina del Cusco. Ubicado en

http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/360/3/Anali_Liliana_Tesis_bachiller_2016.pdf Recuperado el 25/07/2018

27. COSSIO DÍAZ, José Ramón (2008) *Derecho y análisis económico*. México, Fondo de Cultura Económica
28. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNAM (2011) *Análisis económico*. México, UNAM
29. DESCO (1976) *Costos de la administración de justicia*. Lima, DESCO
30. EL COMERCIO (2018) *Aumenta la aprobación del Poder Judicial, según encuesta Ipsos*. Ubicado en <https://elcomercio.pe/politica/aumenta-aprobacion-judicial-encuesta-comercio-ipsos-noticia-579216> Recuperado el 20/12/2018
31. ESCOBAR VÉLEZ, Susana (2012) *La responsabilidad penal por productos defectuosos*. Valencia, Tirant Lo Blanch.
32. ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2018) *Responsabilidad civil*. Lima, Palestra
33. FERRER Mac-GREGOR, Eduardo (2012) *El control difuso de convencionalidad*. México, Fundación universitaria de Derecho, Administración y Política
34. FIGUEROA GUTARRA, Edwin (2013) *Las sentencias del Poder Judicial sobre amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento*. Lima, Gaceta Jurídica
35. FISFALEN HUERTA, Mario (2014) *Análisis económico de la carga procesal del Poder Judicial*. Lima PUCP
36. GARCÍA BELAÚNDE, Domingo (2004) *El Poder Judicial en la encrucijada*. Lima, ARA
37. GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. "Gobierno y Administración del Poder Judicial". En: *Ius Et Veritas*. Año 8, Nº 14, junio 1997
38. GARCÍA CAVERO, PERCY (2008) *Lecciones de Derecho Penal Parte General*, Editorial Grijley, Lima.
39. GARCÍA LUCERO, Dennis (2016) *Tesis "Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre lesiones leves, en el Expediente Nº 00442-2012-O-2501-JR-PE-04 del Distrito Judicial del Santa, Chimbote, 2016"*, Tesis para optar el título de abogado en la Universidad ULADECH. Ubicado en <http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1265/CALIDA>

D_GARCIA_LUCERO_DENNIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y Recuperado el 22/07/2018

40. GARCÍA SAYÁN, Diego (1991) *Poder Judicial y Democracia*. Lima, CAJ
41. GHERSI, Carlos (1997) *teoría general de la reparación de daños*. Buenos Aires, Astrea
42. GHERSI, Carlos (2000) *Valuación económica del daño moral y psicológico: daño a la psiquis, categorización socio económica y cultural, prueba y procedencia, valor del ocio vacacional, modelos de cálculos, pautas jurisprudenciales*. Buenos Aires, Astrea
43. GÓMEZ COLOMER, Juan (2014) *Los fundamentos del sistema adversarial de enjuiciamiento criminal*. Lima, Gaceta Jurídica
44. GONZALES MANTILLA, Gorki (2009) *Los jueces: carrera judicial y cultura jurídica*. Lima, Palestra
45. GUERRERO, Alex (2013) *Detención, comparecencia y arresto domiciliario en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima, Gaceta Jurídica
46. HARGUINDEGUY, Jean Baptiste (2013) *Análisis de políticas públicas*. Madrid, Tecnos
47. HENRIQUEZ AYIN, Narda (1997) *Políticas públicas y Estado*. Documento de trabajo, Materiales de Enseñanza en Administración, en la PUCP
48. HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson (2003) *Indicadores sobre administración de justicia: mapa judicial, presupuesto y eficiencia en el desempeño judicial*. Lima, IDL-PUCP
49. HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson (2007) *13 mitos sobre la carga procesal*. Lima, IDL, 2007
50. HERRERA GUERRA, Carlos. "Regulación administrativa tras la crisis del Estado regulador". En: *Gestión pública y desarrollo*. Nº 31, febrero 2010.
51. HUAMÁN ORDOÑEZ, Luis (2013) *Contencioso administrativo urgente: actuaciones enjuiciables y pretensiones procesales*. Lima, Grijley
52. HURTADO POZO, José. (2005). *Manual de Derecho Penal, parte general I*, 3era edición, Editorial Grijley, Lima
53. KLUGER, Viviana (2006) *Análisis económico del derecho*. Buenos Aires, Heliasta
54. KRESALJA, Baldo (2018) *De pies a cabeza: 150 días en el Ministerio de Justicia, 2004*. Lima, BKR

55. LA LEY (2018) *El proyecto del Nuevo CPC y su intento de matar a la conciliación extrajudicial*. Ubicado en <https://laley.pe/art/5136/el-proyecto-del-nuevo-cpc-y-su-intento-de-matar-a-la-conciliacion-extrajudicial>
Recuperado el 20/10/2018
56. LAHERA, Eugenio (2004) *Política y políticas públicas*. Santiago de Chile, CEPAL
57. LAVADOS MONTES, Hugo (2016) *Introducción al análisis económico*. México, Cengage Learning
58. LÓPEZ GUERRA, Luis. "Consejo General del Poder Judicial y política de la justicia en España. En: *Derecho PUCP*. N° 55, 2002.
59. LOVATÓN PALACIOS, Miguel (2017) *Sistema de justicia en el Perú*. Lima, PUCP
60. MACHUCA FUENTES, Carlos (2011) *Faltas contra la integridad física y el patrimonio*. Lima, Gaceta Jurídica
61. MACHUCA FUENTES, Carlos (2014) *El proceso de faltas en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima, Jurista Editores
62. MALDONADO PAREDES, Antonio. "¿Quo Vadis, Poder Judicial? En: *Derecho y Sociedad*. Año 3, N° 5, 1992.
63. MELGAREJO BARRETO, Pepe (2011) *Curso de Derecho Penal*. Lima, Jurista Editores.
64. MICHUE HUACACHE, Juan Antonio. Tesis "El delito de lesiones contra la vida humana dependiente: precisiones de dogmática penal y política criminal", para optar el título de Abogado en la UNMSM. Ubicado en http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2892/Michue_hj.pdf?sequence=1 Recuperado el 20/03/2018
65. MINISTERIO DE JUSTICIA (2004) *La CERIAJUS: preguntas y respuestas*. Lima, Ministerio de Justicia
66. MINISTERIO DE JUSTICIA (2014) *Protocolo de atención y orientación legal dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia*. Lima, Eurosociat
67. MOLINA CÁCERES, Telmo (2012) *Enfoque de sistemas en el ordenamiento jurídico. Tesis para optar el grado de Maestro en la PUCP*. Ubicado en <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6961> Recuperado el 20/03/2018

68. MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2009) *Tratado de derecho penal patrimonial: usurpación y daños: delitos-faltas*. Lima, San Marcos
69. MONTOYA, Yván. "La responsabilidad penal del médico en las esterilizaciones quirúrgicas involuntarias". En: *Taller de Derecho*. Año 1, N° 1, enero 2002.
70. MORALES GODO, Juan. "Aclaración y corrección de resoluciones judiciales". En: *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*. Vol. 5, N° 1, 2014.
71. MOSELEY, Michael. "Vivir con crisis: percepción humana de proceso y tiempo. P. 267. En: *Revista del Museo Nacional*. Tomo 46, 1982.
72. MUÑOZ CONDE, Francisco (1985). *Derecho Penal, Parte General*. Tirant lo Blanch. Valencia.
73. MUÑOZ POPE, Carlos (2004) *Estudios para la reforma del proceso penal*. Panamá, Panamá Viejo
74. ODUM, H. (1988) *Ecosistemas y políticas públicas*. Gainesville, University of Florida
75. ORE GUARDIA, Arsenio (2016) *El nuevo proceso penal inmediato: flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción*. Lima, Gaceta Jurídica
76. ORELLANA CUEVA, Vicente Ramiro (2012) *Tesis "Política de prevención contra el delito de lesiones"*, para sustentar el título de Abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Ubicado en <http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3530/1/tesis%20definitiva.pdf>
Recuperado el 20/10/2018
77. OROS CARRASCO, Rodolfo (2014) *El derecho penal en la era de la postmodernidad*. Lima, Grijley
78. OVEJERO PUENTE, Ana María (2012) *La presunción de inocencia y los juicios paralelos*. Madrid, La Ley
79. PARODI GIUSINO, Manfredi. (1990). *Delitos de Peligro ente la Dogmática y Política Criminal*, 1era edición, Editorial A. Giuffré, Milano
80. PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. "la naturaleza jurídica "civil" de la reparación civil en la vía criminal y su insostenible carácter accesorio en el proceso penal. En: CALCIN QUISPE, Néstor (2014) *Derecho penal y procesal penal: delitos de crimen organizado*. Lima, Grijley

81. PEÑA CABRERA, Alonso. "El derecho penal del enemigo y su influencia en la legislación penal nacional. En: DEL CASTILLO, Alan y otros (2015) *Bases para un derecho penal latinoamericano*. Lima, ARA
82. PODER JUDICIAL (2014) *Protocolo de Principio de Oportunidad*. Lima, PJ.
83. PODER JUDICIAL (2014) *Protocolo de Terminación Anticipada del Proceso*. Lima, PJ
84. PODER JUDICIAL (2017) *Estadísticas por Corte Superior. Lambayeque*. Ubicado en www.pj.gob.pe Recuperado el 20/11/2018
85. PODER JUDICIAL (2017) *Estadísticas por expedientes ingresados*. Ubicado en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_salas_supremas/as_sala_penal_permanente/estadisticas Recuperado el 21/11/2018
86. PODER JUDICIAL (2017)) *Resolución Administrativa N° 248-2017-CE-PJ*, Ubicado en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c492ae0042c1b254a5cab5bcb58708b2/RA_248_2017_CE_PJ+-+09_08_2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c492ae0042c1b254a5cab5bcb58708b2 Recuperado el 20/20/2018
87. PODER JUDICIAL, CONGRESO NACIONAL DE JUECES (2012) *IV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial*. Lima, Poder Judicial
88. POLAINO NAVARRETE, Miguel (2015) *Derecho penal*. Lima, ARA.
89. PORTOCARRERO HIDALGO, Juan (2003) *Delito de Lesiones*. Lima, Portocarrero.
90. PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2009) *Nuevo proceso penal: reforma y política criminal*, Lima, IDEMSA
91. PRADO, MARÍA DEL CARMEN y otros (2018) *Implementación de políticas públicas: una antología*. Ciudad de México, Centro de investigación y docencia económica
92. PROETICA (2012) *VI Encuesta Nacional sobre percepción de la corrupción*. Lima, Proética
93. RAMÍREZ CARVAJAL, Diana María y GUERRA MORENO, Débora (2018) *Aproximaciones a la justicia en el proceso judicial en Colombia*. Lima, Ibáñez

94. RETTING ESPINOZA, Mauricio Alfredo (2010) *Tesis “Análisis comparativo del tipo básico del delito de lesiones en España y Chile”*, para optar el grado de Doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona, España. Ubicado en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41562/1/RETTIG_TESIS.pdf
Recuperado el 01/05/2018
95. REYNA ALFARO, LUIS (2011) *El proceso penal aplicable al Código Procesal Penal*. Lima, Grijley
96. REYNA ALFARO, Luis Miguel (2007) *La prueba, reforma del proceso penal y derechos fundamentales*. Lima, Jurista
97. RIO LABARTHE, Gonzalo. “La acción civil en el nuevo proceso penal”. En: *Derecho PUCP*. Nº 65, 2010.
98. RIVERA FLORES, Iván (2014) *El análisis económico*. Lima, PUCP
99. ROIG TORRES, Margarita (2000) *La reparación del daño causado por el delito: aspectos civiles y penales*. Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 22
100. ROJAS VARGAS, Fidel (2001) *Código Penal. Jurisprudencia sistematizada*. Lima, Ideosa.
101. ROXIN, CLAUS (1998) *Dogmática penal y política criminal*. Lima, IDEMSA
102. ROXIN, Claus (2012) *La imputación objetiva en el derecho penal*. Lima Grijley.
103. RUBIO CORREA, Marcial (1998) *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Tesis doctoral en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
104. RUBIO CORREA, Marcial. “La reforma del Poder Judicial debe tener una dimensión política de la que no se habla”. P. 21 En: *Derecho PUCP*. Nº 62, 2009
105. RUIZ DÍAZ, Gonzalo. “El costo beneficio del sistema concursal”. En: *Revista de la competencia y la propiedad intelectual*. Año 2, Nº 3.
106. SACK RAMOS, Sylvia (2014) *La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal: ejercicio de la pretensión civil y reparación integral del daño*. Lima, IDEAS
107. SALAZAR MONTOYA, Jimena (2012) *Nuevo proceso penal: las garantías de las víctimas de faltas en el distrito judicial de Huara*. Lima, Tesis PUCP.
108. SALINAS MENDOZA, Diego (2012) *La publicidad del proceso penal como garantía constitucional*. Lima, Palestra
109. SALINAS SICCHA, Ramiro (2005) *Delito de lesiones*. Lima, Gaceta Jurídica.

110. SÁNCHEZ OLIVEROS, Maylin Noelia y VELÁSQUEZ LEDESMA, Claudia Aracelly (2017) *Tesis “La prueba pericial en la acreditación del delito de lesiones psicológicas”*, para optar el título de abogadas en la Universidad Nacional de Trujillo. Ubicado en <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/9888> Recuperado el 03/04/2018
111. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. *Manual de Derecho Procesal Penal*. Editorial Idemsa. Lima, 2004
112. SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo (2014) *Los delitos de peligro: propuestas para su legítima aplicación*. Lima, Gaceta Jurídica.
113. SEGURA QUIÑONES, Jorge Luis. Tesis “La carga procesal y su influencia en el desempeño laboral del personal del III Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2017”, para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo en Trujillo Ubicado en http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11816/segura_qj.pdf?sequence=1
114. SILVA SÁNCHEZ, JESÚS-MARÍA (2007) La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer esbozo. En: *InDret, Revista para el análisis del Derecho* 2/2007, Barcelona
115. SOJO GARZA-ALDAPE, Eduardo (2006) *Políticas públicas en democracia*. México, Fondo de Cultura Económica
116. SOLER, Sebastián (1963) *Derecho Penal*. Buenos Aires, Aranzandi.
117. SOSA SACIO, Juan (2010) *El debido proceso: estudios sobre derechos y garantías procesales*. Lima, Gaceta Jurídica
118. TABOADA PILCO, Giammpol (2018) *Delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y proceso inmediato*. Lima, Gaceta Jurídica
119. TARUFFO, Michele. *La prueba de los hechos*. Editorial Trotta. Madrid 2002
120. TOCORA, Fernando (1990) *Política criminal en América Latina*. Bogotá, Librería del Profesional, p. 226
121. TORRE MUÑOZ, Sonia (2013) *El proceso penal de faltas*. Lima, Grijley
122. TORRE MUÑOZ, Sonia (2013) *El proceso penal de faltas*. Lima, Grijley.
123. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (2012) *Cuadernos de política criminal*. Madrid, EDESA- Universidad Complutense de Madrid

124. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (1997) *Derecho constitucional: perspectivas críticas*. Bogotá, Universidad de los Andes
125. VILLA STEIN, Javier (1998) *Derecho Penal*. Lima, San Marcos.
126. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2001) *Adaptando la legislación penal de Perú a la Convención Interamericana contra la corrupción*. Lima, IDEI
127. VILLEGAS PAIVA, Elky (2013) *El agraviado y la reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima, Gaceta Jurídica
128. YON RUESTA, Roger (2016) *Tesis “Interpretación constitucional de los delitos imprudentes: con especial referencia al tráfico vial y al vínculo 124 del Código Penal”*. Ubicado en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U2tBr0mfWgEJ:tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7904/YON_RUESTA_ROGER_INTERPRETACION_CONSTITUCIONAL.pdf%3Fsequence%3D1+%&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=pe Ubicado el 17/05/2018
129. ZUÑIGA ESCALANTE, Jorge (2015) *Tesis “Defensa pública y acceso a la justicia constitucional de personas en situación de vulnerabilidad económica”*, para optar el grado de Magister en Política Jurisdiccional.
- CALLIES, Rolf-Peter. (1974). *Teoría de la pena en el Estado Social, Democrático de Derecho*. Fisher Taschembuch Verlag, Frankfurt am Main.